**LA REPRESENTACION JUDICIAL DE MUJERES VICTIMAS DE DELITOS
SEXUALES**

Por: Dora Inés Maturana Maturana

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos
Universidad Santo Tomás
Bogotá D.C.

INDICE GENERAL

Objetivos

Objetivo General.....6

Objetivos Específicos.....6

Hipótesis.....7

Introducción.....10

Metodología.....13

Justificación.....15

Violencia de género y derechos humanos.....17

CAPITULO I

DEFINICIONES Y NORMATIVIDAD

1.1 Violencia contra la mujer.....20

1.2 Daño contra la mujer.....22

1.3 Daño o sufrimiento sexual.....23

CAPITULO II

DESARROLLO NORMATIVO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA.

Protección legal de las mujeres en Colombia.....24

Desarrollo normativo de la violencia sexual.....25

CAPITULO III

VIOLENCIA SEXUAL EN CIFRAS

3.1 Delitos sexuales en Colombia.....28

3.2 Delitos sexuales en la ciudad de Bogotá.....	30
3.3. Exámenes Medico Legales por presunto delito sexual.....	31
3.3.1. Componentes del Examen Médico Legal.....	32
3.3.1.1. Examen Genital.....	32
3.3.1.2. Examen Físico.....	33
3.3.1.3. Examen mental.....	33
3.4. El delito sexual en la modalidad de asalto.....	34
3.4.1. Indicadores del proyecto delito sexual.....	35
3.4.2. Ocurrencia del delito.....	36
3.4.3. Cifras por edades y sexos.....	36
3.4.4 Indicadores de resultados del proyecto delito sexual.....	38

CAPITULO IV

ATENCION JUDICIAL A VICTIMAS

4.1. Calidad de víctima.....	41
4.2. Acceso a la Justicia.....	42
4.3. Ruta institucional de atención a víctimas.....	45
4.3.1. Ruta CAIVAS.....	46
4.3.2. Ruta GEDES.....	48

CAPITULO V

REPRESENTACION JUDICIAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

SEXUAL

5.1 Etapas de la representación judicial.....	52
---	----

5.1.1 Investigación.....	52
5.1.2. Audiencia Preliminar.....	52
5.1.3. Audiencia de formulación de acusación.....	53
5.1.4. Verificación de preacuerdos.....	54
5.1.5. Audiencia Preparatoria.....	54
5.1.6. Audiencia de juicio Oral.....	55
5.1.7. Incidente de reparación Integral.....	56
5.1.8. Facultades adicionales.....	56
 5.2. Entidades públicas que ejercen la representación judicial.....	 58
5.2.1. Fiscalía General de la Nación.....	58
5.2.2. Defensoría del Pueblo.....	59
5.2.3. Secretaria Distrital de la Mujer – Bogotá.....	59

CAPITULO VI

ESTUDIO DE CASOS

Caso a caso.....	60
 CONCLUSIONES.....	 78
RECOMENDACIONES.....	83

ANEXOS

- Derecho de petición de fecha 20 de Noviembre de 2013, radicado No BOG-2013-031496, dirigido a la Dra. Sandra Lucia Moreno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses.
- Oficio en respuesta al derecho de petición No BOG-2013-031496 fechado el 04 de diciembre de 2013.
- Derecho de petición de fecha 12 de enero de 2014, radicado No 20146110033132.
- Oficio en respuesta al derecho de petición No 20146110033132, fechado 29 de enero de 2014.
- Derecho de petición de fecha 2 de abril de 2014, radicado No 20146110523532.
- Oficio en respuesta a derecho de petición No 20146110523532, fechado el 06 de mayo de 2014.
- Derecho de petición de fecha 03 de junio de 2014, dirigido a la Dra Susana Rodríguez Caro, defensoría del pueblo.
- Oficio en respuesta a derecho de petición, fechado el 17 de junio de 2014.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....88

OBJETIVO GENERAL

- Identificar las falencias en el ejercicio profesional de la representación judicial a mujeres víctimas de delitos sexuales en la modalidad de asalto¹, en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proponer recomendaciones a las autoridades judiciales, para la correcta interpretación y aplicación de los mandatos legales² en lo que se refiere a la representación judicial de mujeres víctimas de delitos sexuales.
- Aportar información útil para que quienes ejercen como representantes de víctimas y operadores judiciales, avancen a una nueva práctica jurídica que garantice los derechos especiales de estas víctimas.

HIPOTESIS

¹ En adelante y para efectos de esta investigación, denominaremos “asalto sexual” a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, a que hace referencia la ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano) en sus artículos 205, 206 y 207, en especial cuando el perpetrador o victimario es un completo desconocido para la víctima, y el acto sexual tiene ocurrencia en contextos distintos al familiar o el conflicto armado.

² Las leyes 599 de 2000 y 1257 de 2018, establece que las víctimas en garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación, tendrán derecho a intervenir en la actuación penal, así como a recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado.

La verdadera dimensión de las consecuencias físicas y psicológicas del daño sufrido por la mujer víctima de un asalto sexual, generalmente se quedan por fuera de la apreciación de jueces y fiscales, quienes concentran su actuación en demostrar la posible responsabilidad del imputado en el delito por el que se le investiga, amarrando su actuación a la restringida denominación que del delito hace el Código Penal, muchas veces dejando a la víctima como simple espectadora, contravinendo así, la intención del legislador de dar participación especial a la víctima dentro del proceso penal³.

La tendencia moderna en relación a la protección de las mujeres víctimas de delitos, va encaminada a transformar los derechos humanos formales, en derechos efectivos, a través de garantías constitucionales, normatividad especial y mecanismos internacionales de protección⁴, algunas acciones van más allá y buscan, incluir los abusos sufridos por las mujeres, en la categoría

³ Artículo 250 “Funciones de la Fiscalía General de la Nación” No 7° velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal (...). La asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal.

⁴ Instituto interamericano de Derechos humanos, Derechos humanos de las mujeres: paso a paso. Guía práctica para el uso del derecho internacional de los derechos humanos y de los mecanismos para defender los derechos humanos de las mujeres, Washington, 1997,pág 1.

de violaciones a los derechos humanos y ampliar el marco de responsabilidad estatal para la protección de los mismos tanto en la esfera pública como en la privada.

Muchas veces las mujeres víctimas de asalto sexual, ven como se destruyen sus hogares por el abandono de su pareja, pierden sus empleos, sufren graves daños físicos que les impiden volver a tener relaciones sexuales placenteras, desarrollan inseguridades y trastornos de la personalidad, entre otras muchas consecuencias derivadas del delito, temas que rara vez son abordados en el proceso penal y que se convierten en un peso que la víctima debe cargar por el resto de su vida, sin que nadie responda o se haga cargo de esta situación. No hemos visto hasta el momento que se responsabilice al estado, o al ente territorial por no contar con suficiente fuerza pública que preste seguridad en las calles de los barrios, por falta de iluminación, cámaras de seguridad y/o vigilancia, en sitios que ya son conocidos como zona de frecuente ocurrencia de estos delitos, como puentes peatonales, potreros, parques, lugares de esparcimiento y vehículos de transporte público, etc.

De ahí que el litigio especializado encaminado a representar los intereses de las víctimas de delitos sexuales⁵, deberá lograr visibilizar el verdadero daño causado, y buscar un resarcimiento adecuado y ejemplarizante no solo para la víctima, sino para la sociedad en general, que vaya más allá de la simple condena del autor material, a pagar unos años de prisión, pues la investigación y enjuiciamiento de cada uno de los delitos de genero debe abrir un camino hacia la transformación de la teoría de los Derechos humanos de las mujeres.

⁵ En términos generales la ley establece que la víctima tendrá derecho a participar en las diferentes etapas del proceso penal, aclarando en algunos casos que debe estar representada por un profesional y/o estudiante de derecho, para el caso de los delitos contra la mujer, esta representación debe ser especializada.

Artículo 11 literal H (Código Penal) derechos de las Víctimas: a ser asistidas durante el juicio y en el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado de oficio.

Artículo 137 Numeral 3 (Código Penal) Intervención de las Víctimas en la actuación penal: para el ejercicio de sus derechos, no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado, sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.

Artículo 8 literal B, (ley 1257 de 2008) Derechos de las mujeres: recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad (...).

INTRODUCCIÓN

Durante gran parte de mi vida y por mi condición de mujer siempre me vi enfrentada a la negación, limitación y/o desconocimiento de muchos de mis derechos fundamentales y de manera inconsciente lo acepte como parte de mi naturaleza femenina, pese a contar con el privilegio de acceder a una educación superior en derecho, debo decir que nunca me permití cuestionar la validez y neutralidad de las normas jurídicas.

Fue solo hasta que inicie mi actividad como defensora de los derechos humanos en una organización no gubernamental, que empecé a cuestionarme sobre la efectividad del derecho en la protección de las mujeres, y descubrí que Colombia pese a ser uno de los países con mayor proliferación de normas garantistas y protectoras de los derechos humanos, en especial de las mujeres, presenta cifras de violación de derechos, similares a aquellos países donde no se cuenta con dicha normatividad.

Una de las carreras universitarias más tradicionales y de mayor prestigio en Colombia es el derecho, de ahí que muchas personas y en especial mujeres que hacen parte de movimientos sociales, se inclinan por formarse en esta disciplina; Pero ¿Cuál es el impacto social y jurídico en la protección y garantía de derechos de las mujeres, que genera esta gran cantidad de abogadas?

Mientras cursaba mis estudios de Maestría en Defensa de los Derechos Humanos ante Organismos Internacionales, llego a mí por primera vez la frase “litigio de alto

impacto”, que en palabras de Isabel Agatón⁶ constituye “*un ejercicio académico, político y democrático de poner en duda la constitucionalidad de una norma, cuestionando la dogmática e instrumentalización del derecho como responsable de la desigualdad, para propender por un derecho vivo que además se transforme en uno nuevo*”. Este “litigio estratégico” se está practicando en las altas esferas judiciales y legislativas de nuestro país desde hace algunos años, para lograr cambios legislativos importantes a favor de grupos minoritarios o especialmente vulnerables, tal es el caso de la comunidad LGTBI, los indígenas, los afro descendientes y las mujeres.

“(…) Las demandas de derechos que revisten una naturaleza social o política pueden formularse, aún en un contexto procesal tradicional, en términos de violación individualizada y concreta de un derecho personal y con una víctima determinada. Sin embargo, incluso cuando el caso no tenga carácter colectivo, sí lo tendrá su impacto; de allí que también, en estos supuestos, la actuación judicial tiene sentido de garantizar cierta vía de participación en la esfera política. Podría señalarse que si la violación afecta a un grupo generalizado de personas, en la situación que el derecho procesal contemporáneo denomina de derechos o intereses individuales homogéneos, las numerosas decisiones judiciales individuales constituirán una señal de alerta a los poderes políticos a cerca de una situación de incumplimiento generalizado de obligaciones en materias reelevantes”⁷.

⁶ Isabel Agatón Santander, Justicia de Género un asunto necesario. Bogotá, Temis, 2013.

⁷ Victor Abramovich, “Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política” en, acceso a la justicia con garantía de igualdad, 2006 pág. 62.

Esta investigación dará cuenta del ejercicio profesional de las y los abogados que ejercen como representantes judiciales de víctimas en procesos por violencia sexual contra mujeres en la modalidad de asalto sexual, ante los jueces penales de circuito de conocimiento en la ciudad de Bogotá; En primer lugar, se realizara un acercamiento de tipo conceptual a los temas de interés, tales como la violencia sexual, y los obstáculos de acceso a la justicia, en segundo lugar se reconstruirá la ruta institucional que deben recorrer las víctimas para que su caso llegue a conocimiento de las autoridades, en tercer lugar, se indagara sobre las opciones con que cuentan las víctimas para acceder a un abogado o abogada que intervenga en su caso como representante judicial, y el impacto de dicha representación en la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y finalmente, se realizara el estudio de casos en los que se identificaran con base en las facultades legales, los aciertos, desaciertos y desafíos en la representación judicial de víctimas.

METODOLOGIA

Para llegar a cumplir los objetivos propuestos en esta investigación en especial el principal que consiste en identificar obstáculos para la representación judicial de mujeres víctimas de delitos sexuales, se requirió en primer lugar un análisis de la normatividad legal vigente sobre este delito, Código Penal Colombiano “*Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales*”, especialmente los artículos 205 (Acceso Carnal Violento), 206 (acto Sexual Violento) y 207 (Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir); para delimitar aún más el ámbito de investigación y así obtener mejores resultados, concentre la investigación en la circunstancia de que dichos delitos sean perpetrados por persona desconocida, en lugares públicos o de fácil acceso al público. Ya con estas precisiones, fue posible fijar una hoja de ruta para seleccionar los profesionales que serían entrevistados y la forma de acceder a los expedientes que serían estudiados, que nos aportarían la información durante el trabajo de campo. En cuanto a lo que denominamos obstáculos de acceso a la justicia, se optó por enfocar la investigación únicamente en aquellos derivados de la representación judicial a víctimas en el sistema penal acusatorio.

El paso siguiente fue obtener y analizar las cifras de incidencia de estos delitos, concretamente el que nos ocupa llamado en el medio judicial “asalto sexual”, por lo cual se solicitó información a la Fiscalía General de la Nación, tomando como referencia, la ciudad de Bogotá, por ser la ciudad donde existe una estructura

institucional más completa para la denuncia, investigación y judicialización de estos delitos.

Posteriormente reconstruí la ruta institucional de atención a mujeres víctimas de estos delitos, identificando los actores que participan en cada una de las etapas de la misma, a fin de conocer la forma en la que una noticia criminal de estas características, llega a conocimiento de las autoridades judiciales, para lo cual solicite autorización a la Directora de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación sexuales, para visitar las instalaciones del CAIVAS y del GEDES y realizar entrevistas a los funcionarios encargados.

Finalmente se realizó el análisis de la actuación procesal de los representantes judiciales de víctimas en 45 procesos por violencia sexual contra mujeres, expedientes a los que se tuvo acceso por autorización de los fiscales de conocimiento, para establecer en qué medida su participación representa una garantía de derechos para la víctima, con base en las facultades otorgadas por la ley; adicional a este es estudio de casos, hice un recorrido por las instituciones que prestan el servicio de representación judicial de este tipo de víctimas, en la ciudad de Bogotá, encontrando que son: A) La Defensoría del Pueblo B) La Secretaria Distrital de la Mujer y, C) El Centro de Atención a Víctimas CAV de la Fiscalía General de la Nación. El análisis de toda esta información, me llevo a las conclusiones que refuerzan la tesis inicial de que es necesario poner mayor atención en la representación judicial de víctimas, como herramienta fundamental que garantiza los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

JUSTIFICACIÓN

La violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, es reconocida mundialmente, como una violación a los derechos humanos que amerita que los Estados asuman compromisos y ejerzan diversas acciones para frenar su avance, con la ratificación libre y voluntaria de los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia⁸, en el caso del Estado Colombiano este ha asumido, entre otros, los compromisos de prevención, investigación, sanción y reparación integral de las víctimas; Uno de los instrumentos internacionales a que hacemos referencia es la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) cuyo comité de supervisión a través de la recomendación No 12 de 1989, solicita a los Estados partes, entre otras acciones, que aporten en sus informes estadísticas en cuanto a la atención dada a la violencia de género; Así mismo, la recomendación general 19 de 1992 definió la violencia de género como una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.⁹

⁸ En las últimas décadas Colombia ha suscrito y ratificado tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, incorporándolos a su legislación interna, como ejemplo tenemos, la Convención Contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, y La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), Adoptada por la Organización de Estados Americanos en marzo de 1995; que entran en vigencia para Colombia por virtud de las leyes 51 de 1981 y 248 de 1995 respectivamente.

⁹ Esta recomendación detalla todos los derechos y libertades que resultan vulnerados por la violencia de género, como el derecho a la igualdad en la familia, la igualdad jurídica, la participación política etc. y destaca la autonomía individual y la seguridad física por encima del derecho a la familia

La definición más completa y generalmente aceptada del termino violencia contra la mujer, la encontramos en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem Do Para), que define en su artículo 1 la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En Colombia, un país con uno de los marcos normativos más amplios en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, acompañado de una estructura institucional que parecería suficiente para lograr el objetivo de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, seguimos siendo testigos de la alta incidencia de estos delitos; de ahí que a través de los años los estudiosos de las ciencias sociales, han establecido que tanto nuestras normas jurídicas como las actividades procesales de los operadores de justicia, se encuentra permeadas por preceptos morales y/o religiosos que terminan legitimando la violencia contra la mujer; En palabras de Alda Facio Montejo¹⁰, “El derecho no se compone solo de las normas formalmente enunciadas, hay que considerar la prevalencia de normas que han sido derogadas pero que se encuentran vigentes en la mente de la gente, y las normas de la costumbre, usos y creencias”.

¹⁰ Alda Facio Montejo, con los lentes de género se ve otra justicia, serie el otro derecho, número 28, julio de 2002. ILSA, Bogotá, Colombia 2002.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Es de reciente data la preocupación mundial por de la violencia contra la mujer como una cuestión importante de derechos humanos, pues anteriormente se consideraba un asunto doméstico que no debía trascender las paredes del hogar, y en el cual el estado no tenía injerencia alguna. Aunque fue difícil llegar a un consenso, la violación y el asesinato, por su gravedad en sí mismas, fueron aceptadas como conductas de violencia contra las mujeres, pero se necesitaron muchísimos años más para lograr entender que existen otra gran cantidad de prácticas culturales y conductas que también constituyen violencia contra la mujer y que afectan su dignidad como ser humano ¹¹.

La violencia de género no fue una cuestión importante en las conferencias globales de mujeres en 1975 y 1980, aunque se mencionó de manera explícita en el documento de Copenhague de 1980, las estrategias para el futuro, aprobadas en Nairobi en 1985, identificaron la reducción de la violencia contra la mujer como estrategia básica para abordar el problema de la paz.

¹¹ La violencia de género adopta distintas formas tales como: Violación, agresiones físicas y asesinato, mutilación o ablación genital femenina, la violencia basada en género ejercida por la policía y las fuerzas militares durante los conflictos armados y también en la vida cotidiana, la violencia contra las mujeres refugiadas y las solicitantes de asilo, el tráfico de mujeres y la prostitución, el acoso sexual, el embarazo y el aborto forzados, la esterilización impuesta, el infanticidio de niñas y la muerte provocada de fetos hembra, el matrimonio infantil y el obligado, los asesinatos de honor y las violaciones provocadas por la viudez.

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979, no mencionó la violencia contra la mujer, pero el comité que supervisa la Convención elaboró inicialmente una recomendación contra la violencia en 1989 y en 1992 formuló una recomendación más amplia que definía la violencia basada en el género como una forma de discriminación, dejando en claro que los Estados estaban obligados a eliminar la violencia perpetrada por las autoridades públicas y por los particulares, introduciendo el argumento que la incapacidad de un Estado para proteger a las mujeres de la violencia era en sí misma una violación de los derechos humanos, algunos sugieren considerar la violencia contra las mujeres como una forma de tortura.¹²

Tanto el documento final sobre la Declaración de Viena¹³ y el Programa de Acción reconocieron formalmente los derechos humanos de las mujeres como “Una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos”, la declaración de Viena exigía específicamente el nombramiento de un comisionado especial para la violencia contra la mujer y la redacción de una declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer¹⁴.

¹² Informe Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes (15 de enero de 2008). con respecto a una definición de tortura que respete el género, el Relator Especial se remitió a los elementos que figuran en la definición de la Convención contra la tortura y subrayó que el elemento de propósito se cumple siempre cuando se trata de violencia específica contra la mujer en el sentido de que esta es inherentemente discriminatoria y de que uno de los propósitos posibles enumerados en la convención es la discriminación.

¹³ Documento que surgió como producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993.

¹⁴ En 1994, la Comisión de las Naciones Unidas para los derechos humanos emite la tan anhelada declaración y nombró el comisionado requerido, El Relator Especial para la Violencia contra la Mujer tiene

Otros importantes instrumentos internacionales que abordan la violencia contra las mujeres como un asunto de derechos humanos son: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer¹⁵, el Programa de Acción del Cairo de 1994, en el cual los Estados partes asumieron entre otros compromisos la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres¹⁶; La Plataforma para la Acción de Beijín de 1995, que incluía la sección sobre violencia de género donde se declara el derecho de las mujeres y las niñas a ser protegidas de la violencia, como un derecho humano universal; La Convención Americana sobre Derechos Humanos y su protocolo adicional en el área de derechos económicos, sociales y culturales; La Convención Interamericana para Erradicar, Prevenir y Sancionar la violencia contra la mujeres (convención Belem Do Pará), y La carta Africana de derechos humanos y de los pueblos, entre otros.

Este desarrollo global del concepto de violencia de género como asunto de derechos humanos, se apoyó principalmente en grandes movimientos sociales de mujeres activistas que impulsaron estas reformas.

como misión recoger información sobre el tipo de violencia, recomendar medidas para solucionarla y trabajar con otros miembros de la Comisión de Derechos Humanos.

¹⁵ Esta Declaración se basó en la recomendación general sobre la violencia contra la mujer elaborada por el comité de la CEDAW. Es un documento general que define la violencia contra la mujer de manera amplia para poder incluir el daño físico, sexual y psicológico, o la amenaza de este daño, en la vida privada o pública, califica la violencia de género como una violación de derechos humanos y como un caso de discriminación y desigualdad sexual.

Así mismo, atribuye las raíces de la violencia de género, a las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y argumenta que esa violencia es una creación social que se justifica históricamente y que no es algo natural.

¹⁶ Los derechos sexuales se encuentran en parte reconocidos en las Declaraciones de la ONU sobre los Derechos Reproductivos y Salud Sexual y Reproductiva, hacen referencia al derecho humano a expresar la sexualidad sin discriminación, y están estrechamente ligados al ejercicio y protección de otros derechos humanos fundamentales. Son derechos sexuales entre otros, la prevención de la violencia sexual, la libre opción sexual, educación sexual oportuna, integral y laica, ejercer o no la sexualidad.

CAPITULO I

DEFINICIONES Y NORMATIVIDAD

1.1 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, para la mujer¹⁷; y bajo la premisa de que la violencia contra la mujer trasciende los sectores de la sociedad, independiente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión.

En año 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Para”, agrega a la definición de violencia contra la mujer un elemento fundamental, y es que esta puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. Por su parte la Convención Contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en vista de que los informes de los estados partes no siempre reflejaban de manera apropiada la estrecha relación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra ellas y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, procedió mediante la recomendación general 19 de 1992, a exigir de los Estados partes, la aplicación cabal de la convención, exigiéndoles adoptar medidas positivas para

¹⁷ Declaración sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, Ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 85° sesión plenaria en el año 1993.

eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, estableciendo que la discriminación es una forma de violencia contra la mujer¹⁸.

Entre las acciones que debe asumir el Estado en cumplimiento de los compromisos adquiridos al ratificar estos instrumentos, se incluyen estrategias jurídicas encaminadas a la expedición de normas para proteger a las mujeres de la violencia, muchas de estas normas regulan lo relacionado con la violencia intrafamiliar, en el caso colombiano se destacan: La Ley 294 de 1996 que protege principalmente a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar¹⁹. La Ley 575 de 2000 que elimina la competencia de los conciliadores y jueces de paz, para conocer en materia de violencia intrafamiliar por cuanto se trata de una violación a los derechos humanos y estos no son conciliables; La ley 652 de 2001, que regula el trámite de los procedimientos de sanción a la violencia intrafamiliar y en especial facilita el trámite de las medidas de protección, entre otras.

¹⁸ El comité de seguimiento de La CEDAW adoptó la recomendación general 19 en el año de 1992 donde definió la violencia de género como una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.

¹⁹ La ley 294 de 1996, “por la cual se desarrolla el artículo 42 de la constitución política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”. Artículo 4. *Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuera inminente.*

1.2 DAÑO CONTRA LA MUJER.

La definición moderna más completa de violencia contra la mujer que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos, la encontramos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, que en su artículo 1°, no solo describe las formas en que se puede suscitar esta violencia, sino que trae como novedad que considera también el ámbito público, como escenario de ocurrencia de la misma. La norma referida indica que las conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico son en sí mismas, formas de violencia²⁰.

Acogiendo y desarrollando la normatividad internacional, la legislación colombiana establece en el artículo 3 de la ley 1257 de 2008, una clasificación de la afectación contra la mujer que incluye daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual, económico o patrimonial, es así que para los propósitos de esta investigación, abordaremos con detenimiento lo concerniente a las conductas que derivan en daño sexual.

²⁰ Mediante la recomendación general No 19 de 1992, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, interpreto que la definición de discriminación contenida en el artículo 1, de la (CEDAW), también es una manifestación de violencia.

1.2.1 DAÑO O SUFRIMIENTO SEXUAL.

La ley 1257 de 2008, en su artículo 3 literal C, define las formas como se manifiesta la violencia sexual entendida como “Toda acción que consiste en obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción o chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal; Igualmente se considera daño o sufrimiento sexual cuando la persona agresora obligue a la agredida a realizar tales actos con terceras personas”.

Al igual que ocurre con las demás formas de violencia contra la mujer, la violencia sexual es una expresión del dominio o superioridad del hombre, es un método por el cual se ejerce dominio no solo físico, sino mental y psicológico. El acto sexual realizado con violencia, genera en la víctima sentimientos de temor, vergüenza, culpa, y depresión, que pueden perdurar en el tiempo y desencadenar en problemas de salud que se expresan físicamente.

Un elemento común en los delitos sexuales es la violencia, en este sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, ha establecido que se entienda por violencia la fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica, intimidación, o amenaza “que el agente despliega sobre la víctima para hacer reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la agresión que ejecuta”²¹.

²¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado ponente José Leonidas Bustos Martínez, No 29308 de 13 de mayo de 2009.

CAPITULO II

PROTECCION LEGAL DE LAS MUJERES EN COLOMBIA.

La Constitución Política Colombiana vigente desde 1991, refleja una especial preocupación en materia de derechos humanos, dedicando varios capítulos, a la protección y garantía de los mismos²². Por primera vez en nuestra legislación se nombraba a las mujeres como sujetos de derechos y de protección constitucional.

Así mismo, a partir del año 2012, existe en nuestra legislación penal la categoría de delitos contra la mujer²³. Lo cual aporta dos elementos novedosos al panorama jurídico, en primer lugar, al no requerirse querella, es viable que la autoridad competente inicie la investigación y lleve hasta su culminación procesos aun cuando la víctima se niegue a participar; esto es importante ya que a lo largo de los años el ejercicio profesional del litigio en temas de género, ha demostrado que muchas veces las mujeres sienten temor a participar en estos procesos, por múltiples circunstancias que en ocasiones son insuperables y esto genera poco avance en los procesos de investigación y finalmente impunidad.

²² La Constitución Política de 1991, contemplan nada menos que 83 artículos dedicados solo a la protección y garantía de los derechos humanos, clasificándolos en Derechos Fundamentales; Derechos Sociales, Económicos y Culturales; y derechos colectivos y del ambiente. Una de las novedades de la constitución es el reconocimiento expreso de los derechos humanos de las mujeres, algunos de estos son: (Art 12: Prohibición de Tratos o penas crueles y degradantes; Art 13: Garantía de Igualdad y no discriminación; Art 16: Protección al libre desarrollo de la personalidad; Artículo 42: igualdad de derechos y deberes de la pareja en matrimonio; Artículo 43: igualdad y protección de la mujer y el embarazo).

²³ Artículo 74 Código de Procedimiento Penal, delitos que requieren querella, párrafo adicionado por el artículo 3 de la ley 1542 de 2012: en los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales investigaran de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 7° literal B) de la Convención de Belem Do Para, ratificada por el Estado colombiano mediante ley 248 de 1995.

DESARROLLO NORMATIVO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA²⁴.

En Colombia históricamente, la protección jurídica a las mujeres víctimas de violencia sexual estuvo influenciada por patrones de comportamiento basados en la religión católica, el Código Penal de 1890, regulaba aquellas conductas sexuales que atentaban contra la institución del matrimonio concebida desde el catolicismo, surgiendo tipos penales como el Rapto, el adulterio, el estupro alevoso y la seducción, desconociendo por completo el concepto de libertad sexual.

El Código Penal de 1936, tipifica conductas como, violencia carnal, estupro, abusos deshonestos, corrupción de menores y proxenetismo, delitos considerados como ofensa a la libertad y el honor sexual, pero más adelante esta misma norma establece que se perdona la pena cuando el violador o estuprador se casa con la víctima, o concede una rebaja de pena o perdón a quien mata a su esposa, madre, hermana o hija, sorprendida en acto sexual ilegítimo, dejando entrever que lo que aquí se protege es el honor o la reputación social del hombre o familiar varón cuando la involucrada en tales actos es una mujer, dejando de lado la atención a las afectaciones físicas o mentales que tales actos puedan ocasionar a la mujer.

²⁴ Se excluye de esta relación de normas, aquellas relacionadas con la violencia sexual contra niños niñas y adolescentes (ley 1329 de 2009, ley 1336 de 2009), así como lo relativo a la violencia sexual en el marco del conflicto armado (ley 1719 de 2014) , y la regulación a la violencia intrafamiliar (ley 294 de 1996), ya que los sujetos a quienes va encaminada su protección, no son materia de esta investigación.

El Código Penal de 1980 (decreto ley 100 de 1980), tuvo una gran influencia de los avances normativos y jurisprudenciales internacionales en materia de derechos humanos, de ahí que en cuanto a los delitos sexuales el bien jurídico protegido es “la libertad sexual y la dignidad humana”²⁵; vinculando dos conceptos que hasta entonces habían estado ausentes en lo relativo a la sexualidad humana en especial la sexualidad de las mujeres, como son la libertad y la dignidad, abriendo la puerta para interpretaciones mucho más amplias que exigían de las autoridades un abordaje integral de los delitos sexuales.

Los delitos sexuales regulados por el código penal de 1980, fueron trasladados de manera idéntica al código penal del año 2000, ley 599, sin mayores novedades en cuanto a las circunstancias de agravación o atenuación punitiva; No obstante el bien jurídico a proteger ahora es “la integridad, libertad y formación sexuales”, dejando de lado la “dignidad humana” protegida en la normatividad anterior²⁶, cerrando la posibilidad a una interpretación amplia e integral que a la luz de los derechos humanos, resulta más favorable para las víctimas.

²⁵ Los delitos consagrados en el título XI del decreto ley 100 de 1980 eran: violación, que comprendía el acceso carnal violento, acto sexual violento y acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir; el estupro que comprendía acceso carnal y acto sexual mediante engaño; los actos sexuales abusivos, que comprendían el acceso carnal y actos sexuales abusivos, todos con sujeto pasivo menor de 14 años; el proxenetismo que incluía inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución, la trata de personas, el estímulo a la prostitución, la pornografía con menores y la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores.

²⁶ La ley 360 de 1997, por la cual se modifica el título xi del libro ii del decreto ley 100 de 1980 (código penal), habla de los 2delitos contra la Libertad sexual y la dignidad humana” estableciendo penas mínimas que van desde los 4 años de prisión; esta norma fue derogada por la ley 599 de 2000, actual código penal colombiano, que aumento al penas entre otras reformas.

Actualmente las leyes vigentes 1257 de 2008 y 1542 de 2012 constituyen el punto más alto en cuanto a la protección a las mujeres víctimas de violencia, teniendo a la mujer como sujeto de derecho en sí misma, y no en relación con la conservación y protección de la familia, como las normas anteriores; En especial la ley 1257 de 2008, reconoce que existe un tipo de violencia que afecta solo a las mujeres por su pertenencia al género²⁷, reconoce como actores de dicha violencia tanto a personas particulares como a entidades públicas, incorpora los conceptos de daño patrimonial y económico, e introduce una circunstancia de agravación punitiva al delito de homicidio cuando este fuera cometido contra una mujer por el hecho de serlo, dando paso para la creación del agravante feminicidio²⁸.

Finalmente la Ley 1542 de 2012 que en su artículo 3 adiciona el Código de Procedimiento Penal asignando competencia a las autoridades judiciales, para investigar de oficio todos aquellos delitos de violencia contra la mujer.

²⁷ Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y se dictan otras disposiciones”, Artículo 2. (...) se entiende por violencia contra la mujer, cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

²⁸ Artículo 103. Homicidio. El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses.
Art 104 circunstancias de agravación. La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere contra: Numeral 11 (adicionado por la ley 1257 de 2008) se cometiere contra una mujer por el hecho de serlo.

CAPITULO III.

VIOLENCIA SEXUAL EN CIFRAS²⁹.

A continuación, se analizan las cifras de incidencia del delito de sexual, concretamente el que nos ocupa llamado en el medio judicial “asalto sexual” que no es otro que el acceso carnal, o acto sexual violento, perpetrado por sujeto desconocido, información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por medio de su Embajada en Colombia.

3.1 DELITOS SEXUALES EN EL COLOMBIA.

La Unidad de Delitos Contra la libertad, Integridad y Formación Sexual de la Fiscalía General de la Nación, reporta un numero de ocho mil ochocientas veintiún (8.821) noticias criminales³⁰ en todo el país, por los delitos contemplados en el título IV de la ley 599 de 2000³¹.

²⁹ Toda la información reportada en las distintas tablas y gráficos de este capítulo, excluye lo relativo a niñas, niños y adolescentes, así como hombres, ya que no hacen parte de esta investigación.

³⁰ Una Noticia Criminal es el conocimiento o información sobre la comisión de una conducta punible obtenidos por la policía o la fiscalía. La noticia criminal puede conocerse de oficio o mediante denuncia, querrela o petición especial.

³¹ Noticias criminales asignadas a la Unidad de Delitos Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales-CAIVAS en todo el país, por hechos ocurridos entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013; información suministrada en respuesta a un derecho de petición de fecha enero de 2014. (ver anexo 2).

Tabla 1.

DELITOS SEXUALES	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
ART. 138	4	2	1	2	4
ART. 139	4	4	4	1	2
ART. 205	791	593	946	657	626
ART. 206	657	445	545	479	555
ART. 207	312	206	166	95	102
ART. 210	227	257	317	326	417
ART. 213	32	28	6	1	7
TOTAL	2.027	1.535	1.985	1.561	1.713
Total desagregado	1.760	1.244	1.657	1.231	1.598

- La tabla refleja datos de denuncias presentadas en el año respectivo y en el artículo específico.
- el total desagregado incluye solo aquellas cifras correspondientes a los delitos objeto de esta investigación.

Del total de los 7 delitos descritos en esta tabla, es de resaltar que los tres seleccionados (Art 205 Acceso carnal violento. Art 206 Acto sexual violento y Art 207 Acceso carnal o Acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir) representan los porcentajes más altos de la actividad de jueces y fiscales dedicados a esta especialidad, llama la atención, que la incidencia de estos delitos año tras año ha permanecido relativamente constante, a pesar de los esfuerzos estatales por combatirlos a través de avances normativos, fortalecimiento institucional y las campañas de divulgación masiva de los derechos sexuales. Ya que ninguna de las cifras reveladas por los entes estatales consultados agrega un análisis de las cifras a la luz de la normatividad, son solo datos que dan cuenta de un registro de los hechos sin atención al contexto o a las circunstancias propias del delito, lo que no ayuda a la hora de crear políticas públicas o fijar lineamientos concretos para combatir el delito, de ahí la importancia de los análisis realizados por estudiosos e investigadores del tema que plantean teorías en las que

proponen alternativas a la interpretación, por ejemplo, en el aumento de las cifras de denuncias, donde existe la posibilidad que se deba a la disminución en la tolerancia social a este tipo de delitos o al conocimiento por parte de la ciudadanía de la ruta para el acceso a la justicia, entre otras; Resulta importante aclarar que no solo la víctima está facultada para denunciar, cualquier persona diferente a la víctima y que tenga conocimiento del hecho, podrá ponerlo en conocimiento de las autoridades³².

3.2 DELITOS SEXUALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ ³³

TABLA 2

AÑO	TODOS LOS DELITOS SEXUALES	ASALTO SEXUAL	TOTAL POR AÑO
2009	775	362	1137
2010	677	206	883
2011	645	253	898
2012	742	275	1017
2013	666	342	1008
TOTAL POR DELITO	3505	1438	4943

Un comparativo de las tablas 1 (delitos sexuales en el país), y 2 (delitos sexuales en la ciudad de Bogotá) fácil mente nos lleva a la conclusión que aproximadamente un 50 o 60 por ciento de las noticias criminales por delitos sexuales de que tiene conocimiento la Unidad de Delitos Sexuales, ocurren en la ciudad de Bogotá, esto se explica fácilmente ya que se trata de la capital del país donde se concentra el

³² Ley 1257 de 2008, artículo 15 y Ley 906 de 2004 Art 74.

³³ Denuncias Conocidas Por La Unidad De Delitos Contra La Libertad, Integridad Y Formación Sexuales por el presunto delito de acceso carnal violento y /o acto sexual violento con mujer mayor de edad en la ciudad de Bogotá durante los años 2009 a 2013, información suministrada en respuesta a derecho de petición de fecha 24 de abril de 2014.

mayor número de personas, la tabla dos también nos muestra que aproximadamente un 30% de estos delitos sexuales son cometidos en la modalidad de asalto, requiriéndose acciones inmediatas para mitigar esta situación.

3.3 EXÁMENES MEDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO SEXUAL³⁴

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), durante el periodo comprendido entre el año 2009 al 2013³⁵, practico tan solo en la ciudad de Bogotá un total de 2.788 exámenes medico legales por presunto delito sexual, a mujeres mayores de edad, teniendo en cuenta la edad, el porcentaje más alto se observa en las edades de 18 y 29 años.

Tabla 3³⁶

AÑO	RANGO DE EDADES														T O T A L AÑO
	(18 a 19)	(20 a 24)	(25 a 29)	(30 a 34)	(35 a 39)	(40 a 44)	(45 a 49)	(50 a 54)	(55 a 59)	(60 a 64)	(65 a 69)	(70 a 74)	(75 a 79)	(80y mas)	Sin datos

³⁴ El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en lo relacionado con la violencia sexual, realiza exámenes medico legales como soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional; este examen está constituido de tres aspectos: Examen físico general, Examen genital y Examen mental. El objetivo principal de este examen clínico es determinar cuál es el cuidado médico indicado según los requerimientos de la víctima en ese momento para estabilizar su condición, dentro de los lineamientos planteados en el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012) o aquellos adicionales que por su condición clínica se puedan requerir y la recolección de evidencia médico legal.

³⁵ **Fuente:** Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia. Base: Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia, en respuesta a derecho de petición de fecha 21 de noviembre de 2013. Información del año 2013 comprende los meses de enero a octubre (consulta base de datos 17 de nov.2013, fecha corte 31 de octubre 2013).

2009	160	220	114	74	42	23	12	2	2	1	3	1	-	1	1	655
2010	127	177	108	52	31	20	4	4	1	2	1	-	-	1	-	528
2011	110	185	117	64	28	22	16	9	3	3	2	-	-	1	17	577
2012	114	189	115	51	28	24	14	9	2	1	-	4	2	2	10	565
2013	102	136	90	48	30	12	15	10	1	2	-	1	1	-	15	463
TOTAL POR EDAD																
	613	907	544	289	159	101	61	34	9	9	6	6	3	5	43	

3.3.1. Componentes del examen médico legal:

3.3.1.1. Examen genital.

Durante el curso de esta investigación, se pudo constatar que no todos los hechos de violencia sexual dieron lugar a la realización de un examen genital, también conocido como examen sexológico³⁷, la víctima tiene la facultad de negarse a que se le realice este examen, situación que se origina en aspectos de pudor personal ligados generalmente a creencias religiosas y o limitaciones culturales. También de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar narrados por la víctima durante la entrevista, el investigador puede considerar que dicho examen es irrelevante para la investigación y que no aportara mayores elementos materiales probatorios para dilucidar la investigación, algunas consideraciones a tener en cuenta para decidir la realización de este examen son:

- a) El tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho y la formulación de la denuncia.
- b) La ocurrencia o no de penetración vía vaginal y/o anal durante el hecho.

³⁷ Durante este examen genital se pueden identificar posibles lesiones internas y/o externas en la zona genital de la víctima como rompimiento de himen, laceraciones, heridas, y obtención de muestras de fluidos biológicos para detectar infecciones de transmisión sexual y muestras de ADN para posterior cotejo.

3.3.1.2. Examen físico.

Este examen incluye valoración de edad, química sanguínea para toxicología, y verificación de aspectos generales relevantes como lesiones sobrevinientes y condiciones de discapacidad física, no es un examen común en los delitos de asalto sexual, ya que solo se realiza cuando del relato de la víctima se deduce la posible utilización de sustancias químicas para poner a la víctima en situación de indefensión o incapacidad de resistirse, ante el hecho.

El tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho y la denuncia, también es un factor determinante a la hora de establecer la practica o no de este examen.

3.3.1.3. Examen mental.

Este es uno de los aspectos más importantes del examen médico legal, aunque muy pocas veces es realizado en victimas mayores de edad, su importancia radica en que las secuelas del delito sexual van más allá del daño físico, y como ya se dijo en muchos de los casos es muy difícil evidenciar el daño físico, los investigadores que realizan la entrevista a la víctima, muy pocas veces consideran la importancia de este examen, aun cuando durante la misma, la victima tiene alteraciones en su estado de animo que son evidentes o ataques de llanto incontrolado.

Para quien actúe como representante judicial de víctimas, el resultado de este examen mental resulta de vital importancia al momento de tramitar una indemnización a través del incidente de reparación administrativa al final del proceso penal.

3.4 EL DELITO SEXUAL EN LA MODALIDAD DE ASALTO.

Un estudio realizado durante el periodo comprendido Desde 1 de Enero de 2005 a 31 de Agosto de 2008, evidencio que aproximadamente en el 30% de los casos en investigación por delitos sexuales, se quedaban rezagados y sin resolver, principalmente por falta de pruebas y fallas en la investigación, en especial aquellos delitos denominados por los investigadores como “asalto sexual”, donde el autor es un sujeto totalmente desconocido para la víctima³⁸. Ante la necesidad de evitar la impunidad, se creó al interior de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales, el grupo GEDES, como parte del Programa de Reforma al Sector de la Justicia que contó con el apoyo de con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo el Plan Colombia como proyecto piloto inicialmente en la ciudad de Bogotá³⁹.

³⁸ Unidad de Delitos Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales de la Fiscalía General de la Nación, disponible en la Revista Huellas No. 65-66. ISSN 1657-6829, documento interno de la fiscalía General de la Nación, diciembre de 2008. Imprenta nacional de Colombia pagina 43 y 44).

³⁹ Se trata de un programa de asistencia integral para el sector de la justicia en Colombia, con énfasis especial en la Fiscalía General de la Nación. El programa liderado por el Departamento de Justicia de los E.E.U.U enfoca sus esfuerzos en seis áreas o proyectos que interactúan en forma muy cercana: (1) Implementación del sistema acusatorio; (2) Apoyo a la Unidad y al proceso de Justicia y Paz; (3) Apoyo a la Unidad de Derechos Humanos y enjuiciamiento de casos de derechos humanos; (4) Crímenes complejos: crimen organizado, estupefacientes, lavado de activos, extinción de dominio, delitos sexuales, corrupción, terrorismo, entre otros; (5) Protección: protección de testigos; seguridad de juzgados y salas de tribunales; y protección de fiscales, investigadores, jueces y funcionarios; (6) Ciencias Forenses: investigaciones por medio de ADN, huellas dactilares, balística, documentos falsos y exhumación.

3.4.1 INDICADORES DEL PROYECTO DELITO SEXUAL⁴⁰

(Junio de 2008 a diciembre de 2013).

El total de casos asumidos por el proyecto asalto sexual durante el periodo reportado fue de mil ochocientos sesenta y dos casos (1.862), con un total de mil ochocientas dieciséis (1.816) víctimas, cifra que incluye hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes.

⁴⁰ Información suministrada por la Dra. Susan Angélica Artunduaga Torres, analista de datos del proyecto de delitos sexuales GEDES, Para la embajada de Estados Unidos, en respuesta a solicitud mediante correo electrónico de fecha 29 de enero de 2015..

3.4.2. OCURRENCIA DEL DELITO.

Tabla 3

Total desplazamiento de patrulla GEDES por llamada a Marfil	2.323
Asignación de Noticias criminales	1.563
Casos que iniciaron desde otros despachos	299
TOTAL CASOS	1.862

Durante el periodo comprendido el grupo GEDES, tuvo conocimiento directo de dos mil treientos veintitrés hechos (2.323), a través de llamadas telefónicas que realiza la Policía Nacional, la víctima, un testigo o el personal de un establecimiento de salud, que tengan conocimiento del caso, no obstante los resultados también arrojan que 760 de estos casos (es decir el 32%), fueron casos concluidos como falso relato luego de realizar tareas iniciales de investigación, aunque también es alto el número de casos que llegan remitidos desde otros despachos judiciales (299), donde tras la investigación se determina que corresponden al delito de asalto sexual. por lo tanto una vez depuradas las cifras y dejando de lado aquellos falsos relatos, se concluye que la cifra real de asalto sexual es de 1.862 casos, esto significa que en la ciudad de Bogotá, se presentaron aproximadamente 0.8, hechos constitutivos de asalto sexual por día, durante el periodo reportado.

3.4.3. CIFRAS POR EDADES Y SEXOS.

Para efectos del cumplimiento del objetivo de esta investigación, a continuación se discriminan las cifras por edades y sexos.

GRAFICO 1

GRAFICO 2

- MUJERES ADULTAS: ochocientas setenta y seis (876) es decir el 51%.
- MUJERES MENORES DE EDAD: niñas y adolescentes ochocientas sesenta y una (861) es decir el 49%.
- HOMBRES ADULTOS: cuarenta y tres (43)
- HOMBRES MENORES DE EDAD: niños y adolescentes treinta y seis (36).

El índice de ocurrencia del delito, y el sexo de la víctima, indican claramente que el asalto sexual es un delito de violencia contra la mujer o de género⁴¹, donde el hombre ejerce su dominación sexual sobre la mujer que es considerada un objeto que se puede poseer y del cual se puede disponer, posiblemente la preferencia sexual y/o identidad de género, incida en aquellos hechos donde la víctima es un hombre, y en cuanto a los menores de edad, la constante sigue siendo el deseo de dominar y someter la voluntad de otro ser humano, considerado débil.

3.4.4. INDICADOR DE RESULTADOS DEL PROYECTO.

TABLA 4

ASALTO SEXUAL - GRUPO GEDES			
CASOS ASIGNADOS		1.862	
CASOS RESUELTOS		1.271 = 68.4%	
CASOS EN INDAGACIÓN		591= 32%	
Condenas	184	Investigación completa sin evidencia para identificación	752
Absoluciones	17	Inexistencias del hecho.	109
Preclusiones	15	Pendientes por imputar	25
En juicio	73	Casos archivados.	900

La investigación anterior nos muestra unas cifras muy interesantes que dan cuenta del gran éxito que ha tenido para el esclarecimiento de los hechos y la reducción de la impunidad, la implementación del proyecto GEDES delito sexual, teniendo en cuenta que estos casos hacían parte del 30% que nunca eran resueltos, una tasa de éxito del 68.4% es bastante satisfactoria para el sistema de justicia, no obstante, el alto número de casos

⁴¹ El artículo 74 del código penal colombiano establece en su parágrafo único que si se sospecha de la ocurrencia de un presunto delito contra la mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (...).

archivados (900)⁴², debería ser pues materia de especial atención ya que puede ser evidencia de falencias en la investigación por falta de medios técnicos y/o fallas por parte del personal que investiga, o la alta tendencia de la sociedad a denunciar hechos inexistentes, y así congestionar el aparato judicial.

El que se hayan presentado 752 casos donde la investigación está completa y no hay elementos para identificar al agresor, dan cuenta de una carencia tecnológica que afecta estos procesos, la instalación de cámaras de seguridad de alta calidad en las calles y demás puntos críticos como parques, riveras de ríos, puentes peatonales etc y el monitoreo constante de estas cámaras, por parte de personal de la Policía Nacional, sería una posible solución, también el patrullaje constante de personal de seguridad, así como la inversión en más y mejores bases de datos que permitan cruzar información para la identificación de los posibles sospechosos, ayudaría a reducir esta preocupante cifra.

⁴² Artículo 79 C.P.P. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS: Cuando la fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudara mientras no se haya extinguido la acción penal.

CAPITULO IV

ATENCIÓN JUDICIAL A VICTIMAS

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se ha establecido, que a las víctimas del delito, les asisten los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral, garantías que se hacen efectivas cuando se les da la oportunidad de participar de una manera activa e informada en el proceso. Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana⁴³, en relación con el alcance y la naturaleza compleja de los derechos de las víctimas, fijo las siguientes reglas que han sido reiteradas en múltiples ocasiones:

1) Concepción ampliada de los derechos de las víctimas: los derechos de las victimas del hecho punible, no se restringen a una reparación meramente de tipo económico, pues las autoridades judiciales y administrativas deben siempre procurar la efectividad de los derechos a la verdad y la justicia, y la reparación integral, que involucra los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad y participar en las decisiones que las afectan incluyendo actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos, el derecho a que las víctimas sean escuchadas cuando se negocie la pena o se delibere sobre una medida de libertad condicional etc.

2) Deberes correlativos a las autoridades públicas: las autoridades públicas deben orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de los derechos de las

⁴³ Sentencia C-651 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.

víctimas, contando con canales efectivos de comunicación, capacidad técnica y administrativa para la atención de la víctima, entre otros.

3) Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los derechos de las víctimas: los derechos a la verdad, justicia y reparación, son interdependientes pero autónomos, y la satisfacción de uno de ellos, no necesariamente depende de la satisfacción de los demás, en muchos casos las expectativas de la víctima abarca sola mente uno de los aspectos, no obstante la administración de justicia debe poner a disposición de esta toda su capacidad a fin de lograr la garantía total de derechos.

4.1 CALIDAD DE VICTIMA.

Para acreditar la condición de víctima se requiere que exista un daño concreto, real y específico, de cualquier naturaleza que legitime su participación en el proceso penal, para la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

El artículo 132 del Código Penal Colombiano, define a las víctimas, como aquellas personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos, que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto; La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor, e independientemente de la existencia de una relación

familiar con este. Una prueba sumaria⁴⁴ es suficiente para demostrar la calidad de víctima y a partir de entonces la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación están en la obligación de suministrar información necesaria para su participación activa en el proceso judicial.

4.2 ACCESO A LA JUSTICIA.

El derecho fundamental de acceso a la justicia, en especial para las mujeres víctimas, definido como la posibilidad de contar con las instancias necesarias, competentes, independientes e imparciales para dar a conocer los hechos bajo los cuales sus derechos se encuentran en peligro de ser vulnerados o lo han sido⁴⁵, se concreta con el ejercicio pleno de otros derechos conexos, en especial el de recibir la información precisa que le facilite una participación activa en el proceso⁴⁶. Las víctimas en un proceso penal tienen, entre otros, derecho a

⁴⁴ El tema de la prueba sumaria ha sido estudiado por la corte constitucional en su sentencia C-523 del 2009, magistrado ponente Antonio Rocha Alvira de la siguiente manera “ la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien pueda perjudicar”, y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte <Suprema de Justicia, la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, que sea pertinente o conducente, que sea la adecuada para demostrar el hecho, o el acto jurídico concreto.

⁴⁵ Esta conceptualización de acceso a la justicia fue desarrollada en la investigación *la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema penal acusatorio*, publicada por Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Serie Acceso a la Justicia. Bogotá 2008.

⁴⁶ Artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS: a quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la policía judicial y la fiscalía general de la nación le suministrar la información sobre:

- Organizaciones a las que puede acudir para obtener apoyo
- El tipo de apoyo o servicios que puede recibir.
- Lugar y el modo de presentar una denuncia o querrela
- Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas.
- El modo y las condiciones en que puede pedir protección.
- Condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, psicológicas y de otro tipo.
- Los requisitos para acceder a una indemnización.

atención y protección inmediata para su seguridad personal y familiar, y a la protección de su privacidad y dignidad, que serán proporcionados por el fiscal del caso de oficio o a petición de la víctima, quien a la vez será responsable de poner en conocimiento de la víctima estos derechos y asegurarse de que los entienda debidamente para que pueda ejercerlos.

-
- Los mecanismos de defensa que pueden utilizar.
 - El trámite dado a su denuncia o querrela.
 - Los elementos pertinentes que le permitan en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.
 - La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchado tanto por la fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello.
 - La fecha y el lugar del juicio oral.
 - El derecho que le asiste a promover incidente de reparación integral.

ACTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS VICTIMAS ⁴⁷

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-45
	ACTA DERECHOS Y DEBERES DE LAS VICTIMAS	Versión: 02 Página: 1 de 1

USTED TIENE DERECHO A:

- ☐ **Derecho a recibir información en:** Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo, el tipo de apoyo o de servicios que puede recibir, el lugar y el modo de presentar una denuncia o una querrela, las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas, el modo y las condiciones en que puede pedir protección, las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesoría psicológicas u otro tipo de asesoría, los requisitos para acceder a una indemnización, los mecanismos de defensa que puede utilizar, el trámite dado a su denuncia o querrela, los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación, la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello, la fecha y el lugar del juicio oral, el derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral, La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia y la sentencia del juez. *09241
- ☐ A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno
- ☐ A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor
- ☐ A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código
- ☐ A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas
- ☐ A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar
- ☐ A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto
- ☐ A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señala la ley
- ☐ A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio
- ☐ A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial; o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos

USTED TIENE EL DEBER DE:

- ☐ Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia.
- ☐ Asistir a los requerimientos realizados por la Fiscalía con ocasión a su denuncia
- ☐ Ofrecer un trato respetuoso hacia los funcionarios que intervienen en su procedimiento.

ARTICULOS 11 y 136 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LEY 906 DE 2004

SE INFORMA A LA PARTE INTERESADA QUE CUENTA CON UN TÉRMINO DE HASTA 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LOS HECHOS PARA INTERPONER QUERRELA DE PARTE

FIRMA VICTIMA O DENUNCIANTE _____

NOMBRE COMPLETO CON CEDULA _____

⁴⁷ Este es el documento que los funcionarios del CAIVAS, entregan a las mujeres víctimas de violencia sexual, tras la primera entrevista, una vez ponen en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo.

4.3 RUTA INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

Desde el año 2005, se llevó a cabo un Programa de Reforma al Sector de la Justicia con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo el Plan Colombia, con el propósito de ofrecer celeridad y eficacia en la investigación y judicialización de delitos de alto impacto social como son: El crimen organizado, estupefacientes, lavado de activos, extinción de dominio, delitos sexuales, corrupción y terrorismo⁴⁸. En desarrollo de este programa, se creó al interior de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Delitos sexuales, encargada de la atención inicial e investigación de estas conductas desde un abordaje integral e interdisciplinario, con tecnología avanzada para el análisis probatorio y personal capacitado en todas las áreas requeridas.

⁴⁸ Se trata de un programa de asistencia integral para el sector de la justicia en Colombia, con énfasis especial en la Fiscalía General de la Nación. El programa liderado por el Departamento de Justicia de los E.E.U.U enfoca sus esfuerzos en seis áreas o proyectos que interactúan en forma muy cercana: (1) Implementación del sistema acusatorio; (2) Apoyo a la Unidad y al proceso de Justicia y Paz; (3) Apoyo a la Unidad de Derechos Humanos y enjuiciamiento de casos de derechos humanos; (4) Crímenes complejos: crimen organizado, estupefacientes, lavado de activos, extinción de dominio, delitos sexuales, corrupción, terrorismo, entre otros; (5) Protección: protección de testigos; seguridad de juzgados y salas de tribunales; y protección de fiscales, investigadores, jueces y funcionarios; (6) Ciencias Forenses: investigaciones por medio de ADN, huellas dactilares, balística, documentos falsos y exhumación.

4.3.1 RUTA CAIVAS (BOGOTÁ)

Centro de Atención Integral a Víctima de Delitos Sexuales – CAIVAS
<ol style="list-style-type: none"> 1- Orientación: Es el primer contacto de la víctima con la unidad de delitos sexuales, en esta instancia recibe orientación sicojurídica. 2- Recepción De La Denuncia: A cargo de los investigadores del CTI o DIJIN, si la víctima es menor de edad, este procedimiento se realiza por parte de psicólogos forenses del CTI. 3- Examen Médico Forense: Si el caso lo amerita, la víctima es remitida al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que le sea realizado examen forense que se compone de tres aspectos: Examen físico general, Examen genital y Examen mental. 4- Acompañamiento Integral: A cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, los funcionarios en esta dependencia tienen como propósito hacer un acompañamiento integral a la víctima, verificando su acceso a servicios sociales de apoyo. 5- Representación Judicial De Víctimas: Si la víctima es mujer mayor de edad, una vez recibida la denuncia, es remitida para que la abogada de litigio de la Secretaría Distrital de la Mujer, le brinde orientación, asesoramiento y/o asistencia jurídica especializada.

En cumplimiento de lo estipulado por el art 136 del Código Penal, se elaboró un documento denominado Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas, durante el estudio, se pudo evidenciar que este documento es entregado a la víctima justo en el momento en que se encuentra realizando la denuncia, que por lo general coincide con un momento de crisis emocional, donde la víctima no ha recibido apoyo psicológico y aún está tratando de asimilar el hecho, y esto aunado a que son mínimas las explicaciones o dichas explicaciones no son traducidas a un

lenguaje sencillo y claro, genera que las víctimas le presten la mínima atención y no comprendan su contenido.

En los casos estudiados, también refieren las víctimas que se han sentido intimidadas en el momento en que son advertidas por parte del funcionario receptor, a cerca de la responsabilidad penal que se deriva de una falsa denuncia⁴⁹, pues erradamente comprenden que si la falta de pruebas no permite demostrar la ocurrencia del hecho, serán sometidas a la sanción prevista por la norma; Esta situación puede generar temor, ya que en especial en esta clase de delitos, las víctimas no cuentan con testigos de los hechos, o con elementos materiales probatorios más allá de sus afirmaciones, es por esto que se considera importante que antes de formular la denuncia la víctima entre en contacto con un defensor de víctimas especializado.

⁴⁹ Código Penal Colombiano, Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia
art 435: Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie ante autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno a dos años y multa de dos a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.3.2 RUTA GEDES (BOGOTÁ).

Un estudio realizado durante el periodo comprendido Desde 1 de Enero de 2005 a 31 de Agosto de 2008, evidencio que aproximadamente en el 30% de los casos en investigación por delitos sexuales, se quedaban rezagados y sin resolver, principalmente por falta de pruebas y fallas en la investigación, en especial aquellos delitos denominados por los investigadores como “asalto sexual”, donde el autor es un sujeto totalmente desconocido para la víctima⁵⁰. Ante la necesidad de evitar la impunidad, se creó al interior de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales, el grupo GEDES, como parte del Programa de Reforma al Sector de la Justicia que contó con el apoyo de con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo el Plan Colombia como proyecto piloto inicialmente en la ciudad de Bogotá⁵¹.

⁵⁰ Unidad de Delitos Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales de la Fiscalía General de la Nación, disponible en la Revista Huellas No. 65-66. ISSN 1657-6829, documento interno de la fiscalía General de la Nación, diciembre de 2008. Imprenta nacional de Colombia pagina 43 y 44).

⁵¹ Se trata de un programa de asistencia integral para el sector de la justicia en Colombia, con énfasis especial en la Fiscalía General de la Nación. El programa liderado por el Departamento de Justicia de los E.E.U.U enfoca sus esfuerzos en seis áreas o proyectos que interactúan en forma muy cercana: (1) Implementación del sistema acusatorio; (2) Apoyo a la Unidad y al proceso de Justicia y Paz; (3) Apoyo a la Unidad de Derechos Humanos y enjuiciamiento de casos de derechos humanos; (4) Crímenes complejos: crimen organizado, estupefacientes, lavado de activos, extinción de dominio, delitos sexuales, corrupción, terrorismo, entre otros; (5) Protección: protección de testigos; seguridad de juzgados y salas de tribunales; y protección de fiscales, investigadores, jueces y funcionarios; (6) Ciencias Forenses: investigaciones por medio de ADN, huellas dactilares, balística, documentos falsos y exhumación.

Grupo Elite de Delitos Sexuales - GEDES

Para que un delito sexual, sea de conocimiento de este grupo especial, debe reunir las siguientes características:

- Que el hecho haya ocurrido durante las últimas 24 horas.
- Que el agresor sea sujeto desconocido.

El proceso de atención de casos en este grupo élite se desarrolla en las siguientes fases.

- 1- Contacto con la víctima: Basta con una llamada a la línea de emergencia de la Policía Nacional (línea 123), o a la línea especial (línea 155) destinada para denunciar delitos de violencia contra la mujer.
- 2- Entrevista rápida o "flash": Una vez los investigadores toman contacto con la víctima, tratan de hacer una entrevista que les brinde información básica.
- 3- Recorrido por el lugar de los hechos: Se realiza un recorrido por el lugar de los hechos con la víctima.
- 4- Asignación del fiscal: A diferencia del procedimiento ordinario que veremos más adelante, los casos de conocimiento de grupo GEDES no son sometidos a reparto.

CAPITULO V

REPRESENTACION JUDICIAL A VICTIMAS

La Constitución Nacional en su artículo 250 numeral 7, define los rasgos básicos del rol que cumplen las víctimas dentro del proceso penal, dándoles un carácter de intervinientes que pueden ejercer de manera autónoma de las funciones del Fiscal⁵². La forma como puede actuar la víctima en el proceso penal (ley 906 de 2004), depende de varios factores: 1- del papel asignado a otros participantes, en particular al Fiscal; 2- del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; 3- del lugar donde ha previsto su participación; 4- de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y 5- del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.

El Fiscal como titular de la acción penal, no sólo representa los intereses del Estado sino también promueve los intereses de las víctimas, sin embargo, estas pueden actuar sin sustituir ni desplazar al Fiscal, pues según el propio artículo 250, numeral 7, de la Carta, la víctima actúa como interviniente especial, pero dada la complejidad y el alto grado de conocimiento que se debe tener para intervenir en un proceso penal, la ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal

⁵² Si bien el Acto Legislativo 03 de 2002 radicó en cabeza del Fiscal la función de acusar, no supedita la intervención de la víctima a la actuación del Fiscal. La Constitución no le otorgó a la víctima dentro del proceso penal la condición de parte, sino de interviniente especial, lo que significa que no tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente, y actuar, no solo en una etapa, sino “en el proceso penal”.

Colombiano, en su artículo 137 numeral 3, contempla una figura denominada representación judicial de víctimas, donde se prevé que a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir, tendrá que ser asistida por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico.

En este mismo sentido y como norma de carácter especial, La ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres” establece en su artículo 7 literal B, que las víctimas tienen derecho a recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado a cargo del Estado, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad.

Cual quiera sea el caso, la función de este representante judicial de victimas es de vital importancia en el proceso penal, toda vez que su participación garantiza el contacto permanente, directo y fluido con la víctima durante toda la actuación, sirviendo como interlocutor con el fiscal del caso para que esta comprenda plenamente sus derechos y los ejerza debidamente absolviendo dudas y preguntas que surgen con ocasión del proceso y que la víctima en ocasiones teme exponer.

5.1 ETAPAS DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL⁵³

Las víctimas podrán intervenir de manera especial a lo largo del proceso penal de acuerdo a las reglas previstas en la norma constitucional mencionada y el código de procedimiento penal así:

5.1.1. INVESTIGACIÓN:

Es facultad de la Fiscalía General de la Nación, la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito, que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo, no obstante, durante esta etapa, la víctima o su representante judicial tendrá derecho a ser oída y a que se le facilite el aporte de pruebas⁵⁴.

5.1.2. AUDIENCIA PRELIMINAR⁵⁵:

Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o de juicio oral, se adelantaran, resolverán o decidirán en audiencia preliminar, ante juez de control de garantías (art 153 Código de Procedimiento Penal); ejemplo, audiencia de formulación de imputación⁵⁶.

⁵³ Artículo 137 Código Penal “las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal (...).

⁵⁴ Artículo 200 y 11. literal D, Código de Procedimiento Penal

⁵⁵ Art 136 Numeral 11 Código de Procedimiento Penal.

⁵⁶ Art 286 Código de Procedimiento penal. la formulación de la imputación es el acto a través del cual la fiscalía general de la nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante juez de control de garantías.

La víctima podrá ejercer directamente o por intermedio del fiscal, ante el juez de control de garantías las siguientes acciones: a) Solicitar la práctica de pruebas anticipadas⁵⁷ b) solicitar la imposición de medidas de aseguramiento en el evento en que esta no se solicitada por el fiscal ⁵⁸ c) Solicitar la adopción de medidas indispensables para su protección, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad⁵⁹ d) Solicitar las medidas cautelares (embargo y secuestro), sobre los bienes del imputado o acusado, a fin de garantizar la reparación integral⁶⁰ e) Controvertir la decisión judicial que se adopte respecto al principio de oportunidad⁶¹

5.1.3. AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN⁶²:

El fiscal presentara el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el Juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o participe.

Del escrito de acusación la fiscalía deberá entregar copia a la víctima (art 337 inciso final Código de Procedimiento Penal).

A la audiencia de formulación de acusación podrán concurrir los demás intervinientes de la actuación, sin que su ausencia afecte la validez.

(Artículo 339 C.P.P. parágrafo 3)

⁵⁷ Art 154 Código de Procedimiento Penal.

⁵⁸ Artículo 306 inciso 3 Código Penal.

⁵⁹ Art 134 Código Penal.

⁶⁰ Artículo 92 Código Penal.

⁶¹ Artículo 325 inciso 3 código Penal.

⁶² Artículos 336, 137 No 3, 339 y 340 del C.P.P, y Artículo 7° Literal B Ley 1257 de 2008.

En esta audiencia se determinara la calidad de víctima y se reconocerá su representación legal (artículo 340 del C.P.P).

5.1.4. VERIFICACION DE PREACUERDOS.

Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el Fiscal lo presentará ante el Juez de conocimiento como escrito de acusación.

La víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez a cargo de aprobar el preacuerdo (sentencia C-516 de 2007).

Las reparaciones efectivas que puedan resultar de los preacuerdos, pueden aceptarse o no por la víctima, quien en caso de rehusarlos podrá acudir a las vías judiciales pertinentes⁶³.

5.1.5. AUDIENCIA PREPARATORIA⁶⁴.

El juez declarara abierta la audiencia preparatoria con la presencia del Fiscal, el Defensor, el acusado el Ministerio Público y la representación de

⁶³ Artículos 327 inc 4, 350, 351, 359 inc 2, 369 y 370 Código de Procedimiento Penal.

⁶⁴ Artículo 355 Código Penal. (no obstante el artículo 205 constitucional no da a la víctima el carácter de parte, sino de interviniente, en el desarrollo de esta audiencia la víctima tiene las mismas facultades tales son: a) Solicitar las pruebas no pedidas por las partes y que considere indispensables b) solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los elementos materiales probatorios de ser necesario.

las víctimas si las hubiere, mas no es indispensable para su validez la presencia de la víctima o su representante.

Durante esta audiencia el juez concede el uso de la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que quieren para sustentar su petición, excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida, que pudiese tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitara su práctica. (Común mente esta facultad también le es otorgada al representante de víctimas, por parte de los jueces que presiden las audiencias, aunque la norma no lo prevé explícitamente, art 2357 inciso 3 Código de Procedimiento Penal).

5.1.6. AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.

La víctima y/o su representante judicial, estarán presentes durante la audiencia de juicio oral, conociendo de primera mano la práctica de las pruebas ordenadas por el juez⁶⁵, pero su intervención en esta etapa, se limita a presentar sus alegatos de conclusión atinentes a la responsabilidad del acusado⁶⁶.

⁶⁵ Artículo 377 y 396 Código de procedimiento Penal.

⁶⁶ Artículo 443 inciso 3 código de procedimiento Penal.

5.1.7. INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL⁶⁷:

Una vez en firme la sentencia condenatoria en un término no superior a 30 días, la víctima a través de su representante judicial, solicitara por escrito ante el juez fallador, convocar a la audiencia pública para dar inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal.

En la audiencia, el juez concederá en primer término, el uso de la palabra al representante de víctimas, quien formulara oralmente su pretensión, con expresión concreta de la forma de reparación a la que aspira y las pruebas que pretende hacer valer.

La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este trámite, implicara el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud y la condena en costas.

5.1.8. FACULTADES ADICIONALES

No confrontación⁶⁸: La víctima podrá decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.

Audiencias a puerta cerrada⁶⁹: En los Delitos Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales, el representante de víctimas, puede solicitar al juez, disponer la realización de audiencias cerradas al público.

67 Artículos 102, 136 numeral 13 y 137 Numeral 7 Código de Procedimiento Penal

68 Artículo 8 literal K, ley 1257 de 2008.

69 Artículos 137 y 149 Código Penal, párrafo adicionado ley 1257 de 2008.

Aumento de pena⁷⁰: cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que la Fiscalía, el Ministerio Público, la víctima o su representante cuando tuvieren interés la hubieren demandado.

Oposición o apoyo a la preclusión⁷¹: En la audiencia donde se resuelva la solicitud de preclusión presentada por el Fiscal, el Juez concederá el uso de la palabra a la víctima.

Rehusarse al preacuerdo⁷²: La reparación efectiva de la víctima que pueda resultar de los preacuerdos entre el fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima, en caso de rehusarlo, ésta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.

5.2 ENTIDADES PUBLICAS QUE EJERCEN REPRESENTACIÓN JUCICIAL.

Las entidades con que cuentan las mujeres víctimas para su representación judicial de manera gratuita en la ciudad de Bogotá son:

- 1- La Fiscalía General de la Nación.
- 2- La Defensoría del Pueblo.
- 3- La Secretaria Distrital de la Mujer.

A continuación veremos cómo cada una de ellas ejerce sus competencias.

⁷⁰ Artículo 188 Código Penal.

⁷¹ Artículo 33 inciso 3 Código penal.

⁷² Artículo 351 inciso 6 Código Penal. Conc. 327 inc. 4, 359 inc. 2, 369, 370. C-516/20078 (exequible en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo).

5.2.1. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

A través del Centro de Atención a Víctimas CAV⁷³, que es una dependencia de la Fiscalía General de la Nación cuyo objetivo inicial era brindar orientación, información y acompañamiento jurídico, psicológico y social a los familiares y de las víctimas del delito de homicidio, pero posteriormente amplió su área de cobertura a delitos como violencia intrafamiliar y delitos sexuales, con especial énfasis en el trámite del incidente de reparación integral⁷⁴

Durante el estudio de casos se evidencio que la participación de los estos estudiantes en procesos por delitos sexuales se da por solicitud del fiscal de conocimiento y a partir de la audiencia de juicio oral, la fiscalía recurre a este servicio no obstante que el Código de Procedimiento Penal, exige que la víctima esté representada por un abogado⁷⁵, existen en Bogotá opciones disponibles para cumplir con este mandato legal ya que tanto la Defensoría del Pueblo⁷⁶ como la Secretaria Distrital de la Mujer, prestan este servicio de manera gratuita para la mujer.

⁷³ El Centro de Atención a Víctimas de la ciudad de Bogotá presta sus servicios al público desde el año 2012, se encuentra ubicado en el bloque A del Complejo Judicial Paloquemao, actualmente existen convenios con las universidades Libre, Externado, Militar y Gran Colombia, que proporcionan estudiantes de último año de derecho, psicología y trabajo social, aproximadamente 30 estudiantes de estas tres áreas prestan sus servicios al CAV, es importante resaltar que por el gran volumen de procesos que se manejan en este Centro, cada estudiante en el semestre debe conocer entre 20 y 30 procesos.

⁷⁴ Código de procedimiento penal, artículo 102. “...En firme la sentencia condenatoria y previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del ministerio público a instancias de ella, el juez fallador convocara a la audiencia pública que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal...”.

⁷⁵ Artículo 11 literal H Código de Procedimiento Penal: Derechos de las victimas (...) a ser asistida durante el juicio y el incidente de reparación integral por un abogado que podrá ser designado de oficio.

⁷⁶ La ley 1257 de 2008 en su artículo 8, asigna a la Defensoría del Pueblo, la función especial de representación legal de mujeres víctimas de violencia.

5.2.2. DEFENSORIA DEL PUEBLO⁷⁷.

La Defensoría del Pueblo ejerce la función de asistencia y representación judicial de víctimas, a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública, integrado por un gran grupo de dependencias que actúan de manera armónica para garantía de derechos⁷⁸. Quienes ejercen directamente la representación judicial de víctimas, son abogados y abogadas vinculados como Defensores Públicos en tres casos especiales a saber: Sistema de responsabilidad penal para niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006), violencia contra la mujer (Ley 1257 de 2008) y justicia para víctimas de conflicto armado (Ley 1448 de 2011).

La representación judicial de mujeres víctimas de violencias al interior de la Defensoría del Pueblo⁷⁹, es ejercida en la práctica por cualquiera de los defensores públicos con que cuenta la institución, una de las estrategias de la entidad para afrontar el mandato legal de representación de víctimas de violencia,

⁷⁷ Es uno de los órganos de control del Estado o Ministerio Público, creado por la Constitución Política de 1991, cuyo propósito es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, su funcionamiento y organización se rigen por la ley 24 de 1992.

⁷⁸ El Sistema Nacional de Defensoría Pública en Colombia, está integrado por: La Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública, los Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales, los Coordinadores Administrativos y de Gestión, los Coordinadores Académicos, los Personeros Municipales, los Defensores Públicos, los Investigadores, Técnicos y Auxiliares, los Judicantes (Estudiantes de los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho), las personas y asociaciones científicas dedicadas a la investigación criminal y las organizaciones que brinden capacitación a los componentes del Sistema.

⁷⁹ Ley 1257 de 2008 Artículo 7° derechos de las mujeres: Literal B. recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todos los casos garantizara la prestación de este servicio a través de la defensoría pública.

es la constitución de un equipo de litigio especializado, que en la actualidad está conformado por una dupla de abogadas que como puede entenderse es insuficiente para asumir la representación en la gran cantidad de casos que diariamente se presentan en la Ciudad de Bogotá, por tanto su función más que litigar, es fijar criterios de atención, lineamientos técnicos y asumir la representación en los casos que en materia de litigio se llaman “representativos” o “emblemáticos”; esta división está integrada directamente a las funciones de los defensores públicos, y no hace parte de la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y asuntos de Género⁸⁰.

5.2.3. SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER⁸¹.

En cuanto a la representación judicial de víctimas, mediante el componente de Litigio de Género y Justicia Integral, la Secretaria Distrital de la Mujer brinda asesoría, orientación y acompañamiento Jurídico especializado, a mujeres víctimas de todo tipo de violencias ante instancias judiciales y/o administrativas (Juzgados Penales, Civiles y de Familia, Comisaria de Familia, ICBF, entre otros); En la actualidad cuenta con un equipo de 15 abogadas para el litigio de casos y 23

⁸⁰ La Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y asuntos de Género es una unidad asesora del despacho del Defensor del Pueblo, encargada de asesorarle en lo relacionado con la divulgación y promoción de los derechos de los grupos a su cargo, así como con el seguimiento de las políticas que propenden por su realización efectiva. Su sustento legal se encuentra fundamentado en la ley 24 de 1992.

⁸¹ La Secretaria Distrital de la Mujer es un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, creado gracias al Acuerdo 490 de 2012 del Concejo de Bogotá D.C, que tiene por objeto liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujer y Géneros de la ciudad, adoptada mediante Decreto Distrital 166 de 2010.

abogadas para asesoría y orientación, complementan este equipo 20 psicólogas que hacen seguimiento a los casos para establecer los daños psicológicos que podrán ser alegados en etapas posteriores al juicio, para reclamar la indemnización que la ley prevé, ubicadas en las Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en cada localidad, y en otros espacios claves para la garantía de derechos de las mujeres víctimas como son CAIVAS y CAVIF.

CAPITULO VI

ESTUDIO DE CASOS

El siguiente capítulo pretende determinar el ejercicio o no por parte del representante judicial de víctimas, de las facultades otorgadas por la ley en los casos de violencia contra la mujer, se analizara detalladamente la actuación revisando los expedientes de casos ya fallados⁸², debido a que el Sistema Penal Acusatorio, se basa en el principio de la oralidad, se acudió a la hoja de control de seguimiento a actuaciones, que elaboran las y los asistentes de fiscalía y que reposa en cada expediente.

Para facilitar el estudio ya que son más de 18 las facultades que la ley penal confiere al representante judicial de víctimas, se analizara el ejercicio de dichas facultades en cada etapa del proceso en el siguiente orden: 1) Investigación. 2) Audiencia preliminar. 3) Audiencia de formulación de acusación. 4) Audiencia de

⁸² Para el estudio de casos se llevó a cabo la revisión de 45 expedientes de los procesos que han sido de conocimiento del grupo GEDES entre los años 2008 y 2014, donde se contó con representación judicial de víctimas, quienes inician su intervención en distintas etapas del proceso.

verificación de allanamiento. 5) Audiencia Preparatoria. 6) El Juicio Oral. 7) Incidente de reparación integral. 8) Facultades adicionales.

Participación de representante judicial de víctimas:

Para empezar es necesario precisar que en todos los casos analizados, se contó con representante judicial de víctimas nombrado de oficio o por solicitud de la Fiscalía, en la gran mayoría de los casos esta intervención se daba a partir de la audiencia de juicio oral o de la de lectura del fallo.

Se pudo constatar que se acude principalmente a la asistencia de estudiantes del consultorio jurídico asignados al CAV, y que en ninguno de los casos estudiados se contó con asistencia por parte de la Defensoría del Pueblo.

En los expedientes revisados, no existe constancia de poder para actuar otorgado por la víctima, ya que en los pocos casos en que no se acude al nombramiento de oficio, las víctimas conceden poder verbalmente en la audiencia.

1) Investigación:

Posiblemente debido a que la participación de la representación de víctimas, sucede en etapas posteriores, no se encontró en ninguno de los casos analizados algún tipo de aporte o solicitud probatoria en esta etapa que pudiera contribuir con la investigación.

2) Audiencia preliminar:

No se encontró ninguna solicitud relativa a garantizar la seguridad personal de la víctima u otros miembros de su familia.

3) Audiencia de formulación de acusación:

En ninguno de los 45 casos analizados, se logró evidenciar una solicitud de parte de la representación de víctimas durante la audiencia de imputación, en el sentido que se reconozca como víctima a familiares y parejas sentimentales de la agredida, dejando de lado el hecho de que el delito causa efectos que van más allá del cuerpo de la víctima, afectando su dinámica familiar y su vida en relación. Tampoco hubo pronunciamiento respecto a los agravantes y a evidenciar el hecho de que el delito sexual es un delito de género⁸³, que va encaminado a someter la voluntad de la mujer y menoscabar su auto estima.

4) Preacuerdos y allanamientos.

Un setenta por ciento de los casos se sustentan en evidencia biológica obtenida del ADN analizado tras la denuncia, ante esta evidencia muchos agresores aceptan su responsabilidad y se allanan a los cargos, esto es visto como un éxito en la investigación de casos ya que termina en sentencia condenatoria que se refleja en las estadísticas de la Fiscalía General de la nación, no obstante, la víctima rara vez es tomada en cuenta para que participe de algún proceso de

⁸³ Artículo 74 parágrafo, Código de Procedimiento Penal: en todos los casos que se tenga conocimiento de la comisión de una conducta relacionada con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para investigar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 7° literal B de la Convención de Belem do Pará, ratificada por el Estado Colombiano mediante la ley 248 de 1995.

justicia restaurativa, como si con la retención del delincuente, se sanaran sus heridas y se terminara con las consecuencias psicológicas del delito.

En los casos de verificación de preacuerdo, aun cuando la víctima está facultada para oponerse al mismo cuando no ve satisfechos sus intereses, en 7 de los 45 casos analizados se firmó preacuerdo, y en ninguno hubo manifestación de la representante de víctimas oponiéndose o haciendo observaciones al mismo, aun cuando los intereses de la víctima no fueron reparados en lo mas mínimo.

5) Audiencia preparatoria:

Sucede lo mismo que en la etapa de investigación, por llegar tarde al proceso, la representación de víctimas no tiene la oportunidad de solicitar pruebas que se requieran para esclarecer el caso.

6) Juicio Oral⁸⁴:

Los alegatos de conclusión esgrimidos por la representación de víctimas, en todos los casos analizados, se limita a repetir o complementar los alegatos de la fiscalía, pero no se observa que se haga alusión a temas de derechos humanos y/o normatividad internacional en relación con la protección de los derechos de las mujeres; tampoco se trata de establecer responsabilidades más allá de la del autor, ni se proponen mecanismos de transformación de la práctica jurídica tradicional.

⁸⁴ Por tratarse de un proceso oral, los alegatos de conclusión reposan en grabación magnética en CD, no en todos los casos, solo se tuvo acceso a 5 grabaciones de alegatos de conclusión con participación de representación de víctimas.

7) Incidente de reparación Integral:

Debido a que las y los representantes de víctimas intervienen en el proceso en sus etapas finales, es decir, durante el juicio oral o la lectura de fallo, no hay evidencia en ninguno de los expedientes que se haya solicitado algún tipo de intervención psicológica para ayudar a la víctima a superar el trauma o recaudar pruebas para acreditar el daño emocional y así poder reclamar algún tipo de resarcimiento de perjuicios durante el Incidente de Reparación Integral. En el mismo sentido no se evidencia que exista alguna investigación o aporte probatorio por parte de los representantes de víctimas, en el sentido de establecer si el autor del delito cuenta con medios económicos o bienes que puedan ser objeto de medida cautelar encaminada a resarcir económicamente a la víctima por el perjuicio causado.

A pesar de que los hechos de los casos analizados, ocurren en espacios públicos como paraderos de buses, puentes, calles y potreros etc, en ninguno de los casos la representación de víctimas solicita vincular como responsables a las autoridades de policía o administrativas por no brindar la seguridad pública que es su obligación constitucional, se comprueba la inexistencia o mal funcionamiento de cámaras de vigilancia, la deficiencia de iluminación en las vías, la falta de patrullaje por parte de la policía del cuadrante entre otras irregularidades.

Facultades adicionales:

Durante el estudio se observó que un alto porcentaje de las víctimas no participan del proceso y nunca asisten a las audiencias, diversos estudios han establecido

que uno de los mayores obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, es el sentimiento de vergüenza que les genera el hecho de ver invadido su cuerpo, la falta de apoyo familiar y el temor o sentimiento de repudio que les genera el agresor, es posible que las víctimas desconozcan que tienen derecho a no ser confrontadas con el agresor y que la audiencia puede hacerse a puerta cerrada, no obstante en ninguno de los casos existe prueba del ejercicio de estas facultades por parte de la representación judicial de víctimas.

A continuación se presenta la ficha de análisis en 10 de los 45 casos estudiados, con el propósito de ilustrar el ejercicio de las facultades asignadas a la representación judicial de víctimas, los casos fueron seleccionados al azar, y no obedecen a ningún criterio especial de selección.

CASO No 1		
DELITO	Acceso Carnal Violento	
RADICADO	11001600001320122XXXX	
SENTENCIA	Absolutoria.	
RESUMEN DE LOS HECHOS.	El 23 de noviembre de 2012, siendo las 23:42 horas, Un hombre fue capturado en flagrancia por una patrulla de vigilancia de la Policía Nacional, mientras accedía carnalmente a una mujer de 18 años de edad quien gritaba pidiendo auxilio, en el parque Tercer Milenio; Durante el trámite del proceso, manifestó el delincuente que su intención inicial fue el hurto, pero al no encontrar nada que robar, procedió a la agresión sexual para no irse con las manos vacías.	
DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN	Investigación:	Sin representante de víctimas. Esta etapa tuvo una duración de 17 meses aun cuando el delincuente fue capturado en flagrancia, el Informe Pericial de Laboratorio tardó cinco meses en ser emitido por parte del Instituto de Medicina Legal.
	Audiencia preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación acusación:	Sin representante de víctimas.
	Audiencia preparatoria:	A la víctima le fue asignado como representante judicial uno de los estudiantes del CAV, por solicitud del juez de conocimiento.
	Juicio Oral:	No se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima, ya que esta no acudió a ninguna de las etapas del proceso. El cotejo de ADN excluyo al imputado como donante de las muestras biológicas, por lo que la defensa se apega al alegato de presunción de inocencia para exigir la exoneración de responsabilidad. El juez atendiendo a esta solicitud, procede a dictar sentencia absolutoria argumentando que la falta de presencia de la víctima en el juicio, denotaba falta de interés.

	Incidente reparación:	Sin solicitud en este sentido.
	Facultades adicionales:	<u>Recursos:</u> Ante el fallo absolutorio no hubo pronunciamiento por parte del representante de víctimas, permitiendo que la decisión del caso se basara en una única prueba (cotejo de ADN), prescindiendo de otras tan importantes como el testimonio de los policías que hicieron la captura en flagrancia. Adicionalmente la ley 1542 de 2012 que en su artículo 3 adiciona el Código de Procedimiento Penal asignando competencia a las autoridades judiciales, para investigar de oficio todos aquellos delitos de violencia contra la mujer, por lo que el argumento del juez de la falta de interés de la víctima no tiene cabida en este caso en particular.

CASO No 2		
DELITO	Acceso Carnal Violento (Art 205 Código Penal)	
RADICACIÓN	11001600005520088XXXX	
SENTENCIA	Condenatoria Pena principal 13 años de prisión, sin subrogados.	
RESUMEN DE LOS HECHOS	El 24 de diciembre de 2008, a las 7:00 am, La victima de 26 años de edad se dirigía a su casa después de su jornada laboral, cuando fue abordada por un hombre que intimidándola con un cuchillo la sube a un taxi, dirigiéndola a otro lugar de la ciudad, al parecer la casa del agresor, donde realiza la agresión sexual, durante varias horas, posteriormente la lleva a la calle y la deja abandonada en un sitio desconocido para la víctima, en este lugar la victima toma un taxi que la lleva a su casa y allí con el apoyo de su familia inicia los trámites de denuncia y atención médica.	
DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN	Investigación:	Sin representante de víctimas. El delincuente fue capturado un año después de la ocurrencia de los hechos, gracias al análisis de ADN de muestras biológicas.. Tres meses tardo el Instituto Nacional de Medicina Legal en la realización del examen pericial de genética.
	Audiencia preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
		Se le reconoce personería para actuar como representante de victimas a una abogada de la corporación SISMA mujer.

	Formulación de acusación:	En su escrito el Fiscal solo imputa el delito de acceso carnal violento, se desconocen las razones por las que no imputa también secuestro simple (Art 168 Código Penal) en concurso heterogéneo; la representante judicial de víctimas no ejerce su derecho a oponerse a la imputación.
	Audiencia Preparatoria:	Sin evidencia de actuación especial por parte de la representante de víctimas.
	Juicio Oral:	Sin evidencia de actuación especial por parte de la representante de víctimas.
	Incidente reparación:	Aun cuando la representante judicial de víctimas actuó durante casi todo el proceso y conto con personería para actuar debidamente reconocida por el juez, al momento de dar trámite al incidente de reparación integral, el juez solicita que esta representante judicial acredite su pertenencia a la ONG mencionada, lo cual ocasiono el aplazamiento por una vez de dicha diligencia.
	Facultades Adicionales:	Sin evidencia de actuación especial por parte de la representante de víctimas.

CASO No 3		
DELITO	Acto Sexual con persona puesta en incapacidad de resistir	
RADICACIÓN	11001600005520128XXXX	
SENTENCIA	Condenatoria Pena principal Cinco años de prisión sin subrogados.	
RESUMEN DE LOS HECHOS	<p>El 21 de junio de 2012, siendo las 2:30 PM, la víctima se encontraba en su casa, cuando toca a su puerta un hombre desconocido que se identifica como funcionario del hospital pablo XI, argumentando que debe hacerle un examen físico para ver si es apta para otorgarle un subsidio, durante el supuesto examen realiza tocamientos que a la víctima le resultan sospechosos, por lo que le pide que se vaya de su casa y acude al hospital a denunciar lo ocurrido.</p> <p>Al advertir que han ocurrido otros casos similares, las directivas del hospital ponen el caso en conocimiento de las autoridades.</p>	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	<p>Sin representante de víctimas.</p> <p>Se dio en un tiempo muy corto, ya que los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2012 y para el 21 de enero de 2013 ya se tenía plenamente identificado al autor.</p> <p>Se cree que esta situación excepcional obedeció al interés de los medios de comunicación ya que se logró filtrar que se trataba de un violador serial con el mismo modus operandi desde hacía más de</p>

		4 años, investigado por más de 15 casos similares; A principios de enero del año 2013, se transmitió el programa Séptimo Día exponiendo el caso.
	Audiencia Preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación de Acusación:	Sin representante de víctimas.
	Audiencia verificación allanamiento:	Sin representante de víctimas.
	Audiencia Preparatoria:	N/A
	Juicio Oral:	N/A
	Audiencia lectura fallo:	Tras seis aplazamientos, el juez solicito al Centro de Atención a Víctimas asignar un estudiante para ejercer la representante de víctimas.
	Incidente Reparación:	Sin solicitud en este sentido.
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.

CASO No 4		
DELITO	Acceso Carnal Violento Con circunstancias de mayor punibilidad (Num. 7 art 211 CP)	
RADICACIÓN	11001600005520088XXXX	
SENTENCIA	Condenatoria Pena principal: 156 meses de prisión sin subrogados.	
RESUMEN DE LOS HECHOS	El 6 de noviembre de 2008, la víctima de 19 años de edad, caminaba a su casa desde su colegio, cuando fue abordada por un hombre desconocido quien la intimido con un cuchillo, le llevo a un potrero cercano y la obligo a hacerle sexo oral y masturbarlo, luego le dice que se acueste boca abajo mientras el escapa del lugar.	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	Sin representante de víctimas. 30 meses de una trabajo investigativo.
	Audiencia preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación Acusación:	Allanamiento. Sin representante de víctimas. Durante cuatro meses (En 7 oportunidades) fue necesario aplazar esta audiencia por falta de defensa técnica.
	Audiencia	N/A

	Preparatoria:	
	Audiencia verificación allanamiento:	Sin representante de víctimas. Fue aplazada en dos oportunidades por falta de defensa técnica.
	Juicio Oral	N/A
	Audiencia lectura fallo.	El juez solicito al Centro de Atención a Víctimas asignar un estudiante para ejercer la representante de víctimas. Tras dos aplazamientos por falta de defensa técnica, final mente se realiza la audiencia.
	Incidente Reparación:	El representante de victimas promueve el incidente de reparación integral cuya audiencia ha sido aplazada en 8 oportunidades por inasistencia de la víctima, pues se pidió como reparación las disculpas públicas por parte del acusado, y estas disculpas no pueden darse sin la victima presente.
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.

CASO No 5		
DELITO	Acceso Carnal Violento y Hurto	
RADICACIÓN	11001600005520108XXXX	
SENTENCIA	Condenatoria Pena principal: 100 meses de prisión, sin subrogados	
RESUMEN DE LOS HECHOS	Siendo las 2:00 am, del 31 de octubre de 2010, La victima sale de una fiesta, y aborda un taxi con destino a su casa, unas cuadras más adelante, el taxista detiene el vehículo, la intimida con un cuchillo, la accede carnalmente, le hurta sus pertenencias y luego le da vueltas por la ciudad durante varias horas antes de dejarla abandonada en un parque cercano a la dirección a la que ella le había pedido inicialmente que la llevara.	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	Sin representante de víctimas. Desde la ocurrencia de los hechos hasta la realización de la audiencia preliminar (18 de noviembre de 2012), transcurren más de dos años, sin que la víctima tenga conocimiento del estado de la investigación.
	Audiencia Preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación Acusación:	Allanamiento. Sin representante de víctimas.
	Audiencia verificación allanamiento	Sin representante de víctimas. Realizada tras ocho aplazamientos por falta de defensa técnica.

	Audiencia Preparatoria:	N/A
	Juicio Oral:	N/A
	Audiencia lectura fallo.	El juez solicito al Centro de Atención a Víctimas asignar un estudiante para ejercer la representante de víctimas.
	Incidente Reparación:	Esta audiencia ha sido aplazada en 4 oportunidades, por cuanto la víctima y el representante asignado por el CAV no han tenido contacto alguno.
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.

CASO No 6		
DELITO	Acceso carnal violento con circunstancias de mayor punibilidad.	
RADICACIÓN	11001600005520138XXXX	
SENTENCIA:	Condenatoria Pena principal: 10 años de prisión, sin subrogados.	
RESUMEN DE LOS HECHOS	<p>El 14 de octubre de 2013, entre las 4 y las 5 de la mañana, la victima de 35 años de edad se desplazaba desde la residencia de su progenitora ubicada a la altura de la calle 138 con carrera 154 barrio Lisboa, con destino al lugar donde toma la ruta para su trabajo, cuando fue abordada por tres sujetos desconocidos, quienes amenazándola con arma blanca (cuchillo), a obligan a ingresar a predios aledaños al rio Bogotá, una vez en el lugar señalado, la obligan a despojarse de su ropa y uno a uno proceden a accederla sexualmente vía vaginal, una vez termina, la obligan a llevarlos hasta la residencia de su madre en donde le advierten que no debe denunciar si quiere preservar su vida y la de los suyos.</p> <p>No obstante a las amenazas, la victima denuncia el hecho, y se realiza los exámenes medico legales correspondientes y las muestras para pruebas de ADN.</p> <p>El 27 de octubre del mismo años, la victima caminando por la calle ve pasar a uno de sus agresores, e inmediatamente da aviso a las autoridades quienes lo detienen y lo identifican plenamente.</p>	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	El proceso investigativo fue relativamente corto, ya que las pruebas de ADN llevaron a la identificación del agresor, el mismo reconoció su responsabilidad en el hecho.
	Audiencia Preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación Acusación:	Sin representación de víctimas. Allanamiento

	Audiencia verificación allanamiento.	Sin Representante de víctimas.
	Preparatoria:	N/A
	Juicio Oral:	N/A
	Audiencia lectura fallo:	La fiscal del caso solicita a la secretaria Distrital de la mujer, la asignación de una representante de víctimas para acudir a la audiencia de aprobación o no de preacuerdo, diligencia que se realiza sin que la representante de víctimas haga manifestación especial.
	Incidente reparación:	No se activa el trámite.
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.
CASO No 7		
DELITO:	Acceso Carnal Violento	
RADICACIÓN:	11001600005520118XXXX	
SENTENCIA:	Condenatoria 84 meses de prisión	
RESUMEN DE LOS HECHOS:	El 16 de Agosto de 2011 a las 9:00 am la víctima se desplazaba por la autopista norte y cerca de la entrada principal del cementerio Jardines del Recuerdo, la aborda un sujeto desconocido quien la toma por el cuello y la amenaza con un cuchillo, le dice que le entregue el celular y el dinero, y posteriormente la conduce hacia un potrero, la obliga a sentarse en un barranco donde la accede carnalmente, luego la obliga a acostarse boca abajo mientras escapa. Minutos después la víctima sale del potrero hacia la estación de Transmilenio, y encuentra a un vendedor de minutos quien la auxilia y llaman a la policía.	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	El 16 de mayo de 2014 tras 33 meses de investigación, se concluye esta etapa con la plena identidad del agresor. Fue posible ubicarlo gracias a la identificación que hace el vendedor de minutos quien lo ve meses después por ese mismo sector y da aviso a las autoridades.
	Audiencia Preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación Acusación:	Sin representante de víctimas Allanamiento
	Audiencia verificación allanamiento.	Sin representante de víctimas.
	Audiencia Preparatoria:	N/A

	Juicio Oral:	N/A
	Audiencia lectura fallo:	La víctima acude a la Secretaría Distrital de la Mujer, que le asigna una abogada del programa de justicia de género, quien actúa como representante.
	Incidente reparación:	No se activa el trámite.
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.

CASO No 8		
DELITO:	Acceso carnal violento con circunstancias de mayor punibilidad.	
RADICACIÓN:	11001600005520118xxxx	
SENTENCIA:	Condenatoria 8 años, 9 meses y 12 días de prisión	
RESUMEN DE LOS HECHOS:	Manifiesta la víctima que en la madrugada del día 04 de junio de 2011 siendo las 2:00 am, dos sujetos violentan la puerta principal de su vivienda, donde ella se encontraba durmiendo en compañía de su hijo, uno de ellos la toma por el cuello e intimidándola con un cuchillo le advierte que guarde silencio o podría agredir al niño, posteriormente la lleva a la sala de la vivienda donde la accede carnalmente, mientras tanto el otro sujeto revisaba la casa en busca de dinero y objetos de valor, terminada esta actividad la encierran en el baño y abandonan la vivienda, la víctima al escuchar todo en silencio sale del baño y llama a la policía.	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	Sin representante de víctimas. El proceso había sido archivado por falta de pruebas hasta que en mayo de 2014 una coincidencia del ADN del agresor en otro caso, dio con la identidad del mismo.
	Audiencia Preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación Acusación:	Sin representante de víctimas. Allanamiento
	Audiencia verificación allanamiento:	Sin representante de víctimas.
	Audiencia Preparatoria:	N/A
	Juicio Oral:	N/A
	Audiencia	La víctima acude a la Secretaría Distrital de la

	lectura fallo:	Mujer, que le asigna una abogada del programa de Justicia de Género, quien actúa en esta diligencia.
	Incidente reparación:	No se activa el trámite
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.

CASO No 9		
DELITO:	Acceso carnal violento con circunstancias de mayor punibilidad.	
RADICACIÓN:	1100160000552013XXXX	
SENTENCIA:	Condenatoria 10 años de prisión	
RESUMEN DE LOS HECHOS:	<p>La víctima refiere que el 5 de noviembre de 2013 siendo las 11 de la mañana, regresaba caminando desde el hospital de Meissen, después de un control médico por su estado de gestación de 6 meses, sube al puente, pasa la avenida y bajando el puente es abordada por un hombre desconocido que le la intimida con un cuchillo que le pone a la altura del abdomen, la insulta y le dice que tiene SIDA y que se lo va a contagiar, enseñándole unas cortadas que tiene en las muñecas, ella le ruega que tenga en cuenta su estado de embarazo, a lo que el sujeto hace caso omiso, la hace caminar hacia un potrero, se quita una ruana que lleva puesta y tendiéndola en el césped, le dice que se acueste sobre ella, y procede a accederla carnalmente. Luego le dice que cierre los ojos y huye del lugar.</p> <p>Momentos después la víctima corre de nuevo hacia el hospital Meissen, donde llama a su mamá, quien al llegar y enterarse de lo ocurrido manifiesta que acaba de ver a un sujeto con esas mismas características, e informa a la policía quien lo atrapa.</p>	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	Sin representante de víctimas Cinco meses contados desde que se formuló la denuncia,
	Audiencia Preliminar:	Sin solicitud en este sentido.
	Formulación Acusación:	Sin representante de víctimas. Allanamiento
	Audiencia verificación allanamiento:	Sin representante de víctimas.
	Audiencia Preparatoria:	N/A
	Juicio Oral:	N/A
	Audiencia	Actúa como representante de víctimas una

	lectura fallo:	abogada asignada por la Secretaria Distrital de la mujer, por solicitud de la fiscalía.
	Incidente reparación:	No se activa el incidente.
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.

CASO No 10		
DELITO:	Acceso carnal violento en concurso homogéneo.	
RADICACIÓN:	11001600005520098xxxx	
SENTENCIA:	Condenatoria 10 años de prisión.	
RESUMEN DE LOS HECHOS:	<p>El 4 de diciembre de 2009, La víctima salía de su casa a las 3:30 PM dirigiéndose al paradero del alimentador de Trasmilenio, estando ahí parada se acercó un hombre en una motocicleta quien le dijo que necesitaba hablar algo importante con su novia que vivía en el conjunto residencial la súper manzana, que queda a la vuelta del sitio donde se encontraban, pero como la familia de ella no le permitía la relación el necesitaba que ella le hiciera el favor de ir hasta el apartamento y preguntar por ella presentándose como una amiga y en cuanto ella saliera él se presentaría.</p> <p>La víctima accede y se desplaza caminando hasta el conjunto donde al llegar en la portería se encuentra el sujeto hablando con el vigilante, el deja la moto allí e ingresa con ella y suben al cuarto piso de una de las torres, y ya están allí el saca un cuchillo y amenazándola la obliga a bajarse la ropa y la accede carnalmente vía vaginal, luego al escuchar que alguien sube, le dice que se vista y abrazándola mientras la amenazaba con el cuchillo, la lleva a otra de las torres y procede a repetir el acto.</p> <p>Una vez hecho esto, le dijo que saliera del edificio que el iba atrás vigilándola, que si la veía hablando con alguien le podía pasar algo, la víctima salió llorando pero mientras pasaba al lado de la moto se memorizo las placas y se fue sin mirar atrás, luego llego a su casa y le aviso a su mama quien de inmediato aviso a la policía.</p>	
ACTUACIÓN PROCESAL	Investigación:	Por existir otros cinco casos con similares características y gracias a la información de la motocicleta, se logra identificar rápidamente al agresor.
	Audiencia Preliminar:	La víctima cuenta con representante de víctimas asignado por el CAV
	Formulación Acusación:	Allanamiento.
	Audiencia	Sin actividad especial de la representante de

	verificación allanamiento.	victimas
	Audiencia Preparatoria:	N/A
	Juicio Oral:	N/A
	Audiencia lectura fallo:	Sin actividad especial de la representante de víctimas.
	Incidente reparación:	No se activa en incidente.
	Facultades Adicionales:	No existe evidencia del ejercicio de estas facultades.

CONCLUSIONES

La representación judicial de mujeres víctimas de delitos sexuales, es una gran oportunidad para transformar las prácticas discriminatorias y estereotipadas que persisten en los despachos judiciales, debe constituirse en una apuesta para superar los obstáculos de acceso a la justicia a la que muchas mujeres se enfrentan todos los días; Es desde ese escenario, desde el litigio cotidiano, por la interacción constante con los administradores de justicia y con las víctimas, que deben surgir las grandes transformaciones del derecho, orientadas a la eliminación de las desigualdades y subordinación de las mujeres, la superación de los obstáculos de acceso a la justicia y reparación y restablecimiento de sus derechos, introduciendo nuevos elementos de interpretación de los derechos de las mujeres.

Durante la investigación fue evidente el desconocimiento y por ende la falta de implementación del amplio potencial de esta herramienta por parte de quienes ejercen la representación judicial de víctimas, pues sus actuaciones en muy pocos casos tienen un poder transformador.

En primer lugar se observa que al signar estudiantes de derecho para representar a mujeres víctimas, específicamente en los casos de violencia contra la mujer, el juez está desconociendo la prevalencia de una norma de carácter especial (ley 1257 de 2008), como ya se mencionó anteriormente, esta ley exige expresamente que la representación judicial de víctimas de violencia sexual, sea especializada, lo que implica una preparación en cuanto al marco normativo nacional e internacional de derechos de las mujeres, un conocimiento y acercamiento a los

movimientos sociales y procesos organizativos de mujeres y sobre todo una sensibilidad de género que le permita entender el contexto de la violencia contra la mujer, y evidenciarlo en sus actuaciones y profesionales.

Pero no solo a los jueces puede adjudicársele el desconocimiento de la ley 1257 de 2008, pues durante la etapa de investigación, que se encuentra en cabeza de los fiscales con apoyo de la policía judicial, queda demostrado que estos funcionarios también ignoran dicha norma, toda vez que no proporcionan los medios para que la víctima acceda a representación y asesoría legal desde el momento en que el delito se pone en conocimiento de la autoridad.

Durante la investigación y las entrevistas realizadas, la mayoría de fiscales se excusaban bajo la premisa de que el desconocimiento de la norma en comento se debe a que su actuar se rige principalmente por las normas del Código de Procedimiento Penal, no obstante al abstenerse de nombrar abogados para representación judicial de víctimas en estos procesos, también están violando la normatividad contemplada por los artículos 11 literal H y en el artículo 137 No 5, del Código de Procedimiento Penal⁸⁵.

⁸⁵ Artículo 11 Literal H código de procedimiento penal: derechos de las víctimas: a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado de oficio.

Artículo 137 No 5, del Código de Procedimiento Penal: “si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designara uno de oficio”.

Son varios los inconvenientes que se derivan de la representación judicial a mujeres víctimas de violencia por parte de estudiantes de derecho, entre otras las siguientes:

- Los estudiantes de derecho que prestan sus servicios en el CAV, tienen una permanencia de entre uno y dos semestres, y como se observó en los casos estudiados la duración mínima de un proceso penal por violencia sexual “cuando el agresor es sujeto desconocido”, es de aproximadamente un año y medio, por eso, y depende de la etapa procesal en que el estudiante inicia su intervención, es común observar, que los estudiantes se ven en la necesidad de sustituir los poderes, y puede pasar que en un mismo caso actúen tres estudiantes, generando que las víctimas puedan sentirse frustradas y desconfiadas en cuanto a su relación con su representante de víctimas.
- La formación previa de estos estudiantes en temas de género y normatividad nacional e internacional de protección de derechos humanos de las mujeres, es cuestionable, por lo que en muchos casos las víctimas manifiestan que se han sentido re victimizadas y/o juzgadas por las y los estudiantes, quienes ponen de manifiesto sus prejuicios en el trato con la víctima.
- Otro inconveniente que se presenta comúnmente es que la mayoría de estudiantes que ejercen esta representación, son hombres y aunque no estamos afirmando que su pertenencia al género masculino los haga

insensibles a la problemática de las mujeres, si se ha evidenciado que las mujeres víctimas de delitos sexuales, prefieren ser asistidas por una profesional femenina, ya que les genera mayor confianza.

Algo similar ocurre con los abogados y abogadas que ejercen esta función desde la Defensoría del Pueblo, como ya se mencionó, el número reducido de defensores públicos frente a la alta incidencia de casos, la falta de especialización en temas de género y derechos de las mujeres, entre otros, son grandes obstáculos que desvirtúan la intención inicial de la ley 1257 de 2008, de brindar a las mujeres víctimas de violencia un acceso rápido, fácil y sobretodo efectivo al sistema judicial.

Se pensaría entonces que el servicio de representación judicial de víctimas, prestado por las abogadas del equipo jurídico de la Secretaria Distrital de la Mujer, habría de ser la solución a todos estos obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres, pero como se observó en los casos estudiados, no existe una gran diferencia entre la actuación judicial de estas abogadas, y la que ejercen los representantes de víctimas de las demás entidades estudiadas.

El número de abogadas es tal vez el más reducido en comparación con las demás entidades, por lo que su impacto en la atención a estas víctimas es mínimo; durante esta investigación se constató que la mayoría de jueces y fiscales desconocen que la Secretaria Distrital de la Mujer presta este importante servicio, y por eso siguen recurriendo a los estudiantes del CAV.

En cuanto al ejercicio del incidente de reparación integral, en general, son mínimos los logros obtenidos para la satisfacción y resarcimiento de los derechos de las víctimas, pues en los pocos casos en los que se acciona el mecanismo, el representante judicial de víctimas no cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para justificar sus pretensiones de daño material, económico o patrimonial, psicológico y moral, debido a su vinculación tardía al proceso penal, y su falta de contacto con la víctima aunado a que las entidades públicas que prestan el servicio de representación judicial de víctimas, no cuentan con peritos expertos cuyo dictamen pueda servir para probar los daños, y las víctimas no cuentan con recursos económicos para pagar dichos dictámenes por su cuenta.

Son preocupantes los hallazgos en materia de el ejercicio de la representación judicial de víctimas, donde observamos que las y los abogados encargados del tema, no despliegan en los procesos ni siquiera un mínimo porcentaje de las facultades que la ley les concede en pro de los derechos de las mujeres, para obtener pronta respuesta, resarcimiento de derechos, reparación efectiva y sobre todo, cambiar la práctica jurídica para obtener justicia en estos delitos tan complejos.

RECOMENDACIONES

La extensa normatividad nacional e internacional en materia de protección a la mujer contra la discriminación y demás formas de violencia, podría llevar a pensar que hoy las mujeres cuentan con toda una institucionalidad garante de sus derechos y que esta circunstancia particular se traducirá en el corto plazo en una disminución dramática en la incidencia de delitos contra las mujeres; Pero es en la práctica de la representación judicial y legal de mujeres víctimas, y en el análisis no solo de los fallos judiciales, sino de todo el devenir de la actuación judicial, que se evidencia la urgente necesidad de una concepción distinta del derecho, una práctica judicial realmente transformadora, que escudriñe en las estrategias legales para proteger a las mujeres y garantizar sus derechos.

Contar con tantas normas específicas para la protección de las mujeres, y la judicialización de los agresores es inútil, si los operadores de justicia no las conocen o al conocerlas no las aplican de manera adecuada, la ley penal colombiana ha dado un paso gigantesco al reconocer las agresiones contra las mujeres, como una categoría especial de delitos⁸⁶, pero se quedó corta al no crear el tipo penal específico, pues no existen sanciones concretas que manden el mensaje social de que la violencia contra las mujeres no será tolerada.

⁸⁶ Art 74 Código de Procedimiento Penal parágrafo: adicionado ley 1542 de 2012, art 3°. En todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales investigaran de oficio (...)

Adicionalmente se requiere con urgencia la creación de la jurisdicción de asuntos de género, encargada de aquellos asuntos relacionados con las violencias originadas en razón de la pertenencia al género, constituida por jueces y fiscales especializados en estos asuntos⁸⁷, de manera que la investigación y juzgamiento se concentren en encontrar las raíces de la violencia, las causas estructurales y los vasos comunicantes que la alimentan, ofreciendo además una condena que satisfaga las expectativas de las víctimas, como parte de la reparación integral y la garantía de no repetición; adicionalmente, que las condenas sean ejemplarizantes para desalentar a otros perpetradores de cometer estos delitos, y que incentive a otras víctimas a denunciar y confiar en la justicia.

Surge también la necesidad de un litigio especializado, con abogados que no solo conozcan a fondo las normas nacionales e internacionales de protección a las mujeres víctimas, sino también con vastos conocimientos del sistema penal acusatorio, y que cuenten con las herramientas cognitivas necesarias para generar las transformaciones profundas en requiere el sistema de justicia a través de su quehacer cotidiano. Las facultades de derecho de las universidades en nuestro país se han quedado rezagadas en la formación de abogados que enfrenten este desafío, y es prácticamente durante el ejercicio profesional a través del método de ensayo y error, que los abogados aprenden a abordar este tema

⁸⁷ ONU, Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, 2010... Existen tribunales especializados para conocer asuntos de violencias contra las mujeres en Brasil, España, Uruguay, Estados Unidos.

que si bien es novedoso, requiere de la mayor preparación para que sea exitoso; no basta con la llamada “cátedra de género” que se pretende implementar, es necesario diseñar procesos de formación en justicia de género que incorporen los estudios feministas críticos del derechos y cuya implementación constituya requisito para la acreditación institucional de alta calidad.

Ya que existe un consenso legal en cuanto a que la representación judicial de mujeres víctimas de violencia debe tener un carácter especializado, es necesario que la misma ley defina con claridad ¿en qué consiste esa “especialización”?, ¿cuáles son los aspectos claves que nos llevan a la considerar que una representación judicial es especializada? y ¿cuáles son las consecuencias procesales de que no se evidencie tal especialidad?. La formación en género y derechos de las mujeres, no debe ser el único aspecto que debe llamar la atención del legislador, pues se requiere que el representante judicial de mujeres víctimas de violencia, sea un experto penalista con conocimientos profundos y/o experiencia demostrable en sistema penal acusatorio, derecho procesal y derecho probatorio, pues el alcance de su representación abarca momentos procesales posteriores a la condena, ya que requiere activar el incidente de reparación integral a fin de lograr la plena satisfacción de derechos de su representada.

La ley también debe establecer con claridad el momento procesal en que el representante de victimas asume el ejercicio de sus funciones, pues como pudo

observarse en los ejemplos de esta investigación, ese momento es crítico, y mientras más temprano se llegue al caso, más posibilidades de éxito se tienen, por eso es importante que la ley penal exija como requisito de validez y de cumplimiento al mandato de la ley 1257 en su artículo 8, que exige que la representación judicial de víctimas esté presente en todas las etapas del proceso.

El Estado debe invertir mayores esfuerzos en fortalecer la figura de representación judicial a víctimas, capacitando a sus servidores, ampliando la cobertura y difundiendo la información para facilitar el acceso de las víctimas a este servicio, pues como ya vimos en el capítulo anterior, la intención de la ley 1257 de 2008 en cuanto a signar a la Defensoría del Pueblo la competencia en materia de representación judicial gratuita y especializada de mujeres víctimas, es buena, pero insuficiente y limitada, pues la Defensoría del Pueblo tal como está constituida en la actualidad, resulta desbordada al asumir esta nueva responsabilidad.

Las entidades públicas que prestan este servicio deben incluir en su nómina de funcionarios, o facilitar el acceso a peritos capacitados en temas de daño físico, psicológico y material, que puedan ser tenidos en cuenta en la etapa de juicio oral, y lograr así la reparación integral a que toda víctima tiene derecho.

ANEXOS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-067 de 2003 Expediente D-4111 demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 parcial de la ley 734 de 2002. Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
- Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-209/07, Víctima en Sistema Penal de Tendencia Acusatoria-Factores de los cuales depende su intervención. Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda.
- Colombia. Consejo de Bogotá D.C, Acuerdo 490 de 2012, “crea la Secretaria Distrital de la Mujer”.
- Colombia. Consejo Superior de la Judicatura, sala Administrativa. Acuerdo PSAA08-4552 de 2008.
- Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006, demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 7 del artículo 32, artículos 122, 123 y 124 de la ley 599 de 2000, Magistrado ponente Jaime Araujo Rentería.
- Colombia. Presidencia de la república. Ley 1236 de 2008 “modifica la ley 599 de 2000 en lo relativo a los de abuso sexual”.
- Colombia. Presidencia de la república. Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
- Colombia. Presidencia de la república. Ley 294 de 1996 por la cual se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
- Colombia. Presidencia de la república. Ley 575 de 2000 que reforma parcialmente la ley 294 de 1996.

- Colombia. Presidencia de la república. Ley 599 de 2000, código penal colombiano.
- Colombia. Presidencia de la república. Ley 906 de 2004. Código de procedimiento penal.
- Constitución Política de Colombia, 1991.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) 1994.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180,18 de diciembre de 1979.
- Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. *Situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema penal acusatorio*. Serie Acceso a la Justicia. Bogotá 2008.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado ponente José Leonidas Bustos Martínez, proceso No 29308 de 13 de mayo de 2009.
- Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer Ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 85° sesión plenaria en el año 1993.
- Encuesta a jueces/as y magistrados/as ISBN Bogotá, Noviembre 2011. "Aproximación al conocimiento, percepciones y prácticas sobre igualdad y género en la rama judicial".
- Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, Colombia. Página 361 (Capítulo 13, Violencia contra las mujeres y los niños).

- Facio Montejo Alda. Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de género en el fenómeno legal). San José, C.R.: ILANUD, 1992 P25.
- Facio Montejo Alda, con los lentes de género se ve otra justicia, serie el otro derecho, número 28, julio de 2002. ILSA, Bogotá, Colombia 2002.
- Informe mundial sobre la violencia y la salud, Washington 2013, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
- Instituto interamericano de Derechos humanos, Derechos humanos de las mujeres: paso a paso. Guía práctica para el uso del derecho internacional de los derechos humanos y de los mecanismos para defender los derechos humanos de las mujeres, Washington, 1997.
- Isabel Agatón Santander, Justicia de Género un asunto necesario. Bogotá, Temis, 2013.
- Protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual (Resolución 459 de 2012).
- Victor Abramovich, "Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política" en, acceso a la justicia con garantía de igualdad, 2006.
- XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas y grupos de atención prioritaria. Brasilia. 2008.